



**UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSTGRADO**



MAESTRÍA EN DERECHO

**“EFICACIA DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTAR PROCESO
INMEDIATO EN EL MINISTERIO PÚBLICO - JAÉN –
CAJAMARCA”**

TESIS

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE
MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN
CIENCIAS PENALES**

AUTORA:

ABOG. EMPERATRIZ CARO MELÉNDEZ

ASESOR:

DR. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVARRY CORREA

LAMBAYEQUE-PERÚ

2019

EFICACIA DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTAR PROCESO
INMEDIATO EN EL MINISTERIO PÚBLICO - JAÉN – CAJAMARCA

AUTORA

Emperatriz Caro Meléndez

DNI 40804949

ASESOR

Ezequiel Baudelio Chávarry Correa

DNI 17939636

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo, para optar el Grado de **MAESTRO EN
DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

APROBADO POR:

Dr. José María Balcázar Zelada - PRESIDENTE DEL JURADO

Dr. Rafael Hernández Canelo - SECRETARIO DEL JURADO

Mg. Leopoldo Yzquierdo Hernández - VOCAL DEL JURADO

Octubre, 2018

DEDICATORIA

*La presente investigación se la dedico
a mi familia, quienes son mi orgullo y
motivo de constante superación,
contando siempre con la bendición de Dios.*

AGRADECIMIENTO

A DIOS: Por guiarme en cada momento de mi vida.

A MI FAMILIA: Por estar siempre conmigo, sobretodo en momentos difíciles.

ÍNDICE

RESUMEN.....	7
ABSTRACT	8
INTRODUCCIÓN.....	9
CAPITULO I	
I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA.....	11
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	11
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	14
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	16
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.....	16
1.5. OBJETIVOS	
1.5.1.OBJETIVO GENERAL.....	18
1.5.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	18
1.6. HIPÓTESIS	
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL.....	19
1.6.1.1 VARIABLES.....	19
1.7 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN.....	20
1.7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA.....	21
1.7.2 MATERIALES PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.....	21
1.7.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.....	21
1.7.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS.....	23
CAPITULO II	
I. MARCO TEORICO.....	25
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.....	25
1.2 ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO INMEDIATO.....	27
1.2.1 ANTECEDENTES.....	27
1.2.2 NOCIONES GENERALES DE PROCESO INMEDIATO.....	33
1.2.2.1 CONCEPTO.....	33
1.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO INMEDIATO....	33
1.2.2.3 PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.....	35
1.2.3 SEGURIDAD CIUDADANA.....	44
1.2.4 CRIMEN ORGANIZADO.....	45
CAPITULO III	
EL PROCESO INMEDIATO EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL..	48
CAPITULO IV	
EL PROCESO INMEDIATO EN EL DERECHO COMPARADO.....	76
1. Italia	
2. Costa Rica	
3. España	
4. Chile	
CAPITULO V	
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	81

CAPITULO VI	
DISCUSIÓN.....	96
CONCLUSIONES.....	104
RECOMENDACIONES.....	105
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	107
ANEXOS.....	109

RESUMEN

El problema de la presente investigación se ha denominado: **“EFICACIA DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTAR PROCESO INMEDIATO EN EL MINISTERIO PÚBLICO - JAÉN - CAJAMARCA”**.

La eficacia del proceso inmediato en la ciudad de Jaén se ha visto perjudicado por distintas falencias lo que hace poco posible que se de cumplimiento a lo previsto en el Decreto Legislativo No. 1194 modificado por el Decreto Legislativo No. 1307, que establece que “obligatoriamente” en los casos de flagrancia delictiva se debe solicitar la incoación de Proceso Inmediato, y no por falta de voluntad de los Fiscales sino por razones ajenas a la voluntad del mismo.

En la presente investigación se ha realizado un análisis de la eficacia de instar un proceso inmediato en el Ministerio Público de Jaén - Cajamarca, asimismo se ha estudiado la normativa utilizando la exégesis de la normativa interna correspondiente, así como los casos y/o sentencias vía Proceso Inmediato en Flagrancia Delictiva emitidas en el año 2016.

La investigación tiene como objetivo principal: Determinar la eficacia, en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público – Jaén – Cajamarca.

Asimismo tiene como hipótesis: La falta de recursos logísticos y humanos motivan la ineficacia de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público – Jaén – Cajamarca.

Palabras Claves: Proceso Inmediato, Inseguridad Ciudadana, Crimen Organizado, Flagrancia Delictiva.

ABSTRACT

The problem of the present investigation has been denominated: **"EFFECTIVENESS OF THE OBLIGATORY OF INSTALLING IMMEDIATE PROCESS IN THE PUBLIC MINISTRY - JAÉN - CAJAMARCA"**.

The effectiveness of the immediate process in the city of Jaén has been damaged by various shortcomings which makes it possible that compliance with the provisions of Legislative Decree No. 1194 modified by Legislative Decree No. 1307, which establishes that "mandatory "In cases of criminal flagrancy, the initiation of the Immediate Process must be requested, and not because of lack of will of the Prosecutors, but for reasons beyond the control of the same.

In the present investigation an analysis of the effectiveness of urging an immediate process in the Public Ministry of Jaén - Cajamarca has been carried out. The regulations have also been studied using the exegesis of the corresponding internal regulations, as well as the cases and / or sentences via Immediate Process in Flagrante Delictiva issued in 2016.

The main objective of the research is to: Determine the effectiveness, in the fight against citizen insecurity and organized crime, of the obligation to urge the Immediate Process in the Public Ministry - Jaén - Cajamarca.

It also has the following hypothesis: The lack of logistical and human resources motivates the ineffectiveness of the obligation to urge the Immediate Process in the Public Ministry - Jaén - Cajamarca.

Key Words: Immediate Process, Citizen Insecurity, Organized Crime, Criminal Flagrancy.

INTRODUCCIÓN

El trabajo de Investigación tiene por objeto conocer y analizar el tema relacionado con la **“EFICACIA DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTAR PROCESO INMEDIATO EN EL MINISTERIO PÚBLICO - JAÉN - CAJAMARCA”**, investigación que tiene como finalidad contribuir modestamente con los operadores de justicia, los abogados y todas aquellas personas que tengan interés en conocer los aspectos de dicho tema.

En este sentido la investigación ha sido estructurada del siguiente modo:

En el Primer Capítulo, hacemos mención al Análisis del Objeto de Estudio: Planteamiento del Problema donde se establece la Realidad Problemática, Formulación del Problema, Justificación e Importancia del Estudio, y los Objetivos de la investigación

El Segundo Capítulo hacemos referencia al Marco Teórico, teniendo en cuenta:

1. Los antecedentes del problema, 2. Aspectos Generales del Proceso Inmediato – Antecedentes, 3. Nociones Generales del Proceso Inmediato – Concepto, Características, Principios, 4. Seguridad Ciudadana, 5. Crimen Organizado.

En el Tercer Capítulo, tenemos el desarrollo de doctrina de los artículos 446°, 447° y 448° del Nuevo Código Procesal Penal que hacen referencia al Proceso Inmediato.

En el Cuarto Capítulo, hacemos mención al Derecho Comparado, esto es, el Proceso inmediato en Italia, Costa Rica, España y Chile.

En el Quinto Capítulo, realizamos un análisis y discusión de los resultados de todos los casos que se solicitaron Proceso Inmediato en Flagrancia Delictiva en el Ministerio Público Sede Jaén durante el año 2016.

En el Sexto Capítulo, se discutirá cada objetivo de la presente investigación a fin de esclarecer la problemática y buscar soluciones; y finalmente las Conclusiones, Recomendaciones y Referencias Bibliográficas.

Es importante recalcar que con el presente trabajo de investigación nuestro objetivo no es arribar a conclusiones certeras e irrefutables, sino por el contrario, nuestra pretensión será satisfecha si el presente estudio constituye el punto de partida de un debate orientado a obtener la solución más adecuada posible de este problema.

La autora.

CAPITULO I

I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA

Es evidente que en los últimos años los índices de criminalidad cada día son mayores, pues la inseguridad ciudadana se ha acrecentado de forma abismal, tan es así que el ciudadano de a pie es el más perjudicado, pues no es raro que a diario los medios de comunicación informen sobre robos al paso, homicidios, ajustes de cuentas, violaciones, secuestros, extorsiones y todo tipo de delitos que muchas veces traen consigo pérdidas irreparables.

El Perú es considerado como el país de América Latina que tiene la mayor tasa de víctimas producto de la delincuencia, y es que según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) el 30.6% de los peruanos han sido víctimas – como mínimo – de un acto delincencial durante el año 2014. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2014 la cantidad de casos denunciados a nivel nacional superaban los 270 000¹. No menos cierto es que en la provincia de Jaén, según el reporte del Sistema de Gestión Fiscal, la cantidad de casos denunciados ha aumentado también, así tenemos que en el año 2015 en el Ministerio Público Jaén ingresaron 3 235 denuncias, y en el año 2016, 4 072 denuncias.

Así los hechos, despierta intranquilidad y preocupación entre todos los ciudadanos pues la población exige respuestas o políticas para aminorar el crecimiento veloz de la inseguridad ciudadana, por ello el Estado ha brindado alternativas de política criminal siendo que el Congreso de la

¹ Tejada, J. (2016) “*El Proceso Inmediato y su aplicación en los primeros cien días*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica *Ius In Frangenti*. Año 1. No. 1. Marzo 2016. Lima – Perú. Pág. 50.

República mediante la Ley No. 30336 delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado; ello permitió la modificación procesal y la inclusión de aspectos particulares en el proceso inmediato con el decidido afán de dar celeridad a los trámites para resolver la demanda de justicia penal, una de las políticas fue regular la obligatoriedad del Proceso Inmediato para los casos de flagrancia delictiva, plasmado en el Decreto Legislativo 1194 que modificó los artículos 446°, 447° y 448° del Nuevo Código Procesal Penal; norma que cuando los operadores de justicia la aplican a cada caso concreto se ha podido advertir la falencia de distintos factores que dificultan lograr su eficacia. Tan es así que diferentes autores se han pronunciado por reformas varias, así tenemos a Alfredo Araya Vega en su obra *“El Nuevo Proceso Inmediato (Decreto 1194). Hacia un Modelo de una Justicia como Servicio Público de Calidad con Rostro Humano”*, considera como una de las reformas que:

“Debe ponderarse la existencia de recursos económicos frescos para la modernización del Sistema de Administración de Justicia, Órganos Forenses, Sistema Penitenciario, Defensa Pública”².

De similar parecer es Julio Ernesto Tejada Aguirre en su obra *“El Proceso Inmediato y su Aplicación en los Primeros Cien Días”* quien teniendo en cuenta la realidad del distrito de Tumbes refiere que:

“... han salido a relucir ciertos problemas en la ejecución de este procedimiento previsto en la norma procesal penal, problemas no solo del tipo operativo en el sentido de presupuesto o infraestructura, o de recursos humanos en el sentido de falta de recursos humanos necesarios para su aplicación sino también en el impacto que ha tenido este

² Araya A. (2016) *“El Nuevo Proceso Inmediato (Decreto 1194). Hacia un modelo de una justicia como servicio público de calidad con rostro humano”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti. Año 1. No. 1. Marzo 2016. Lima – Perú. Pág. 12.

Decreto Legislativo en cierto sector de la ciudadanía, quienes han visto cómo es que - en caso de un delito flagrante – la acción de la justicia es rápida y en muchos casos – como el del delito de Violencia y Resistencia a la Autoridad – es severa”³.

Así, consideramos que los problemas presentados en la provincia de Jaén, para la aplicación del Decreto Legislativo 1194, no son aislados, por ende urge la pronta implementación de recursos humanos, materiales logísticos, infraestructura, etc. Todo ello, ha hecho nacer en la investigadora el ímpetu para realizar el presente trabajo de investigación que desde la óptica del derecho nos permita disentir y según la práctica vivida comprobar si las normas dictadas, específicamente el Decreto Legislativo No. 1194 modificado por el Decreto Legislativo No. 1307, al ser aplicados a los casos concretos resulta eficaz en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, aportando con nuevos criterios realistas que nos permitan lograr a través del desarrollo de la presente que el Poder Legislativo y/o el Poder Ejecutivo emitan normas que se ciñan a la realidad teniendo en cuenta la problemática de cada Distrito Judicial pues las normas no deben ser dictadas tomando en cuenta solamente la realidad de la capital (donde se tiene a la mano tecnología de punta, apoyo de personal idóneo, peritos forenses de todas las especialidades, las zonas aledañas no son accidentadas como en nuestra provincia que, muchas veces, para llegar al mismo lugar del ilícito penal se tiene que caminar horas y horas) sino de los demás distritos judiciales, para que las normas emitidas no solamente sean “letra muerta” sino puedan ser eficaces y logren el verdadero propósito para la cual fueron dictadas y así, día a día, combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en el país, compromiso que nos impone un deber a todas las personas como Estado. Debido a todo esto, se formuló el siguiente problema:

³ Tejada, J. (2016) “*El Proceso Inmediato y su aplicación en los primeros cien días*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti. Año 1. No. 1. Marzo 2016. Lima – Perú. Pág. 49.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A mejor entendimiento del planteamiento del problema en el presente trabajo de investigación, debemos partir de lo siguiente: una variable de importancia es la obligatoriedad de incoar proceso inmediato en los delitos flagrantes que tiene que estar necesariamente relacionada con la eficacia que se pretende lograr en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Así, el Estado al emitir leyes consideró que sería una de las soluciones al problema de inseguridad ciudadana y alto índice criminal y lucha contra el crimen organizado, y se coincide que en efecto puede ser alguna de las alternativas de solución; no obstante, las dificultades se presentan cuando los Fiscales deben aplicar dicha norma a cada caso concreto y “obligatoriamente” solicitar la incoación del Proceso Inmediato; y por qué se dice dificultades, porque se considera que no basta sólo con la dación de una norma para combatir el alto índice criminal a nivel de todo el país, pues las realidades de cada Distrito Judicial son diferentes.

En la ciudad de Jaén, para que los Fiscales incoen los Procesos inmediatos en todos los casos de flagrancia delictiva (intervenciones policiales dentro de las 24 horas de cometido el ilícito penal), también se debe contar con la logística de primera mano, llámese laboratorios de criminalística con personal peritos forense, insumos químicos, más personal fiscal y administrativo, etc.; porque ello va a ayudar a que frente a un determinada intervención la Teoría de Caso sea objetiva e irrefutable por la defensa; sin embargo, la realidad es distinta, sólo por mencionar algunos ejemplos, en los casos de intervenciones en flagrancia delictiva por Conducir un vehículo en Estado de Ebriedad, el Fiscal deberá solicitar la incoación de un Proceso Inmediato, para lo cual luego de haber realizado la diligencia de Extracción de Muestra de Sangre, entre otras diligencias, se debe contar con el resultado cuantitativo de dicho examen para calificar con propiedad si tipifica como delito o no, ya que en nuestro ordenamiento jurídico para ser

considerado delito de Conducción en Estado de Ebriedad debe superar el 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, pero el problema se presenta por cuanto no se cuenta con Laboratorio que realice este tipo de pericias, entonces el procedimiento que se realiza es recabar la muestra, remitirla al Laboratorio de Criminalística de Chiclayo de donde en el mejor de los casos, el resultado regresa luego de veinte días, entonces es allí donde recién se califica el delito y se procede a incoar un Proceso Inmediato pero ya no en flagrancia delictiva. Situación similar sucede con los delitos de Tenencia Ilegal de armas, que tampoco se cuenta con un Laboratorio de Balística Forense. Respecto a las intervenciones por Tráfico Ilícito de Drogas, en la Comisaría PNP no se cuenta con un área especializada que se avoque al conocimiento de intervenciones de ese tipo, pues de ello se encarga el Departamento de Investigación Criminal y Ayuda a la Justicia – DEPICAJ, que no cuenta con los insumos químicos (reactivos) para determinar en principio el tipo de sustancia química incautada, y luego de ello se remite al Laboratorio de Criminalística de Lima cuyos resultados regresan a los seis meses en el mejor de los casos. En cuanto a las intervenciones por tráfico de madera ilegal, en la ciudad de Jaén no se cuenta con una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, pues cuando se dan casos de esta naturaleza es el Fiscal Penal de turno el que debe avocarse para luego de haber realizado las diligencias urgentes y necesarias derivar la investigación a la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Chiclayo para que continúe con las investigaciones. En los casos de Violación de la Libertad Sexual, cuyas intervenciones se realicen los fines de semana y/o feriados largos, no resulta posible recabar la referencia de la menor a través de cámara gesell por cuanto en la Sede del Ministerio Público Jaén, solamente se cuenta con una perito psicóloga para atender todos los casos que suceden en la Provincia de Jaén que además de sus doce distritos también se tiene jurisdicción en el distrito de Pión - Chota, distrito de Cañaris - Ferreñafe y Ambato Tamborapa – San Ignacio.

Frente a dichas falencias es poco posible se de cumplimiento a lo previsto en el Decreto Legislativo No. 1194 que establece que “obligatoriamente” en los casos de flagrancia delictiva se debe solicitar la incoación de Proceso Inmediato, y no por falta de voluntad de los Fiscales sino por razones ajenas a la voluntad del mismo, pues según la exposición de motivos de la citada norma la propuesta normativa se orienta a establecer la incoación del Proceso Inmediato de manera imperativa para los casos de flagrancia delictiva, preservando su naturaleza facultativa para los otros dos supuestos, y es que para ir a un proceso inmediato el Fiscal debe contar con todos los elementos de convicción objetivos que sustenten su Teoría de Caso, y las pericias son pruebas irrefutables para ello.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Resulta eficaz, la implementación de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público – Jaén – Cajamarca?

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO

1.4.1 El presente trabajo busca dar a conocer que las realidades de los distritos judiciales son distintas por ende la eficacia del Decreto Legislativo No. 1194 en cada distrito judicial varía dependiendo del apoyo logístico, personal idóneo (fiscal, administrativo, perito forense, personal policial capacitado) con el que se cuente. Así se debe recalcar que muchas veces las normas son emitidas tan solo tomando en cuenta la realidad de la capital – Lima, donde todo está centralizado – logística, personal, inmediatez, etc. –; no obstante, Jaén es una ciudad que más allá de su belleza geográfica y su veloz crecimiento urbano y comercial se caracteriza también por su alto índice criminal pues es común lograr constantes intervenciones por robo agravado, homicidio calificado, violación de la libertad sexual, marcaje y reglaje, tenencia ilegal de armas de fuego,

extorsión, tráfico ilícito de drogas, etc., intervenciones en flagrancia delictiva de las cuales no resulta posible incoar Proceso Inmediato, y no por falta de eficiencia de los Fiscales sino por cuanto no se cuenta con los suficientes instrumentos llámese laboratorios de criminalísticas, de biología forense, personal fiscal, peritos forenses, entre otros, aspectos que limitan la función a solamente Formalizar Investigación Preparatoria en proceso común y solicitar medidas restrictivas como Prisión Preventiva y continuar la investigación como un Proceso Común, conforme se venía haciendo antes de la dación del Decreto Legislativo No. 1194.

1.4.2 En el año 2016, en el Ministerio Público Jaén, de las 4 072 denuncias que ingresaron (tanto 1FPPCJ y 2FPPCJ) se solicitó la incoación de 778 Procesos Inmediatos, entre los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad, y solamente 23 fueron por intervenciones en flagrancia delictiva que corresponde, en su mayoría, a delitos de Lesiones Leves, Hurto Agravado, Receptación Agravada, delitos previstos y sancionados por los artículos 122°, 186°, 195° cuyas penas en su extremo mínimo no son superiores a cuatro años; y es que a eso se ha limitado la obligatoriedad del Proceso Inmediato, a que los Fiscales de la Provincia de Jaén incoen Procesos Inmediatos por delitos de menor gravedad, cuyas acuerdos de Terminación Anticipada generalmente terminan con la imposición de una pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, entonces queda el sin sabor de si realmente la dación del Decreto Legislativo No. 1194 está cumpliendo con su finalidad, cual era la de combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado?, ha resultado eficaz en la lucha contra el crimen organizado, la obligatoriedad de esta norma en la ciudad de Jaén?. Es que acaso con la gran cantidad de procesos inmediatos incoados en delitos de Omisión a la Asistencia Familiar, Conducción en estado de Ebriedad, se está combatiendo la inseguridad ciudadana y el crimen organizado?, se está obteniendo

resultados positivos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en beneficio de la comunidad en general?; son preguntas que a lo largo de la presente se van a tratar de responder.

1.4.3 Así, la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato para todos los casos de flagrancia delictiva, también debe responder a criterio razonables de implementación de recursos humanos, materiales, logística, infraestructura lo que muchas veces resulta escaso e insuficiente en la realidad de la ciudad de Jaén aunado a la excesiva carga procesal que muchas veces hace que el modelo colapse y no resulte eficaz en su propósito para la cual se emitió.

Con el presente trabajo se pretende contribuir al mejor conocimiento de la situación delincriminal en la ciudad de Jaén – Cajamarca, a pesar de las limitaciones y posibles errores de este proyecto de investigación.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1.- GENERAL

Determinar la eficacia, en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público – Jaén – Cajamarca.

1.5.2.- ESPECIFICOS

- Conocer cuán eficaz ha resultado la incoación del Proceso Inmediato en el Ministerio Público – Jaén.
- Determinar los factores que harían eficaz la aplicación del Proceso Inmediato en la ciudad de Jaén.
- Demostrar la importancia de la implementación de un Laboratorio de Criminalística completo para pericias de

todo tipo (absorción atómica, balística, biología forense, dosaje etílico, grafotecnia) con personal idóneo, a fin de incoar Proceso Inmediato en todos los casos de flagrancia delictiva.

- Establecer que no se cumple con el fin de la dación del Decreto Legislativo No. 1194, pues las cifras demuestran que en el año 2016 sólo existieron 23 procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva, delitos de menor gravedad, que no están relacionados directamente con la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana.

1.6 HIPÓTESIS

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL

La falta de recursos logísticos y humanos motivan la ineficacia de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público – Jaén – Cajamarca.

1.6.1.1 Variable independiente (causa)

- La falta de recursos logísticos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado
- La falta de recursos humanos en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado

1.6.1.2 Variable dependiente (efecto)

- La ineficacia de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público – Jaén – Cajamarca.
- Los procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva en la ciudad de Jaén son por delitos menores.

INDICADORES

- Número de denuncias ingresadas en el Ministerio Público – Jaén desde la vigencia del Decreto legislativo No. 1194.
- Número total de procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva desde la vigencia del Decreto legislativo No. 1194.
- Número total de procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva desde la vigencia del Decreto legislativo No. 1194, declarados procedentes.
- Número total de procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva desde la vigencia del Decreto legislativo No. 1194, declarados improcedentes.
- Número total de procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva desde la vigencia del Decreto legislativo No. 1194, por delitos con penas mayores a cuatro años.
- Número total de procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva desde la vigencia del Decreto legislativo No. 1194, por delitos con penas menores a cuatro años.
- Número de sentencias con pena privativa de libertad suspendidas en su ejecución dictadas en los procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva desde la vigencia del Decreto legislativo No. 1194.
- Número de sentencias con pena privativa de libertad efectiva dictadas en los procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva desde la vigencia del Decreto legislativo No. 1194.

1.7 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Determinaremos que la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público – Jaén – Cajamarca, no ha resultado eficaz en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado ello debido a factores como son falta de recursos logísticos y humanos del cual se carece en dicha ciudad.

Mediante el análisis de las 23 carpetas fiscales en las cuales se ha incoado Procesos Inmediatos en flagrancia delictiva durante el año 2016 determinaremos la ineficacia de los Decretos Legislativos Nos. 1194 y 1307 para la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

1.7.1 POBLACIÓN Y MUESTRA

1.7.1.1 UNIVERSO POBLACIONAL (N)

El universo está conformado por todas las denuncias ingresadas al Ministerio Público Sede Jaén durante el año 2016, tanto en la Primera como en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén, que hacen un total de 4072 denuncias.

1.7.1.2 MUESTRA POBLACION (n)

La población muestra está representada por el análisis de las 23 carpetas fiscales que se formaron como consecuencia de la incoación de Proceso Inmediato en flagrancia delictiva en la provincia de Jaén durante el año 2016 cuyo resultado se convierte en sustento que trae como consecuencia el 100% de confianza en el resultado de la investigación.

1.7.2 MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

- Análisis bibliográficos
- Análisis de documentos
- Análisis de Carpetas Fiscales

1.7.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCION DE DATOS

MÉTODOS

1.7.3.1 Métodos generales: inductivo, deductivo, analítico histórico. El método deductivo será empleado a efectos de inferir a través

del análisis de los diferentes conceptos y casos relaciones al presente tema de investigación.

1.7.3.2 Método comparativo: El método comparativo se ha empleado para tener una visión del tratamiento que en otros ordenamientos jurídicos se aplican para el tratamiento de datos personales, por la existencia de una moderna normatividad acorde con la realidad.

1.7.3.3 Método Exegético: también llamado histórico, constituye aquella orientación que va del pasado al presente para proyectarse al futuro por lo que se utilizara en el estudio los antecedentes y el objeto de la investigación.

1.7.3.4 Métodos Específicos: De la observación, experimentación, estadístico.

1.7.3.5 Métodos Descriptivo – explicativo: a través de los cuales se procura dar respuesta como diferentes factores hacen ineficaz la aplicación del Decreto Legislativo No. 1194 en la provincia de Jaén y por ende el incremento de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

TÉCNICAS

1.7.3.6 Observación: Esta técnica permitió percibir los hechos o fenómenos más relevantes que se estudiaron en el trabajo de campo. El instrumento utilizado fue: la Ficha o guía de observación.

1.7.3.7 Análisis documental: El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Como instrumento se empleó: El análisis de contenido.

1.7.3.8 El fichaje: Es una técnica de gabinete que permite fijar infor-

mación extraída de fuentes primarias y secundarias. Sus instrumentos son las Fichas. Entre ellas tenemos:

Registro: Permitió anotar los datos generales de los textos consultados. Lo usamos para consignar las referencias bibliográficas, electrónicas.

Resumen: Esta ficha se utilizó para sintetizar los contenidos teóricos de las fuentes primarias o secundarias que sirvieron como marco teórico de la investigación.

Textuales: Transcribieron literalmente contenidos de la versión original. Se utilizó para consignar aspectos puntuales de la investigación como planteamientos teóricos, normas, jurisprudencia, legislación comparada, principios de la investigación, citas de diferentes autores, etc.

Comentario: Representa el aporte de los investigadores. Es la idea personal que emite el lector de una lectura o experiencia previa. Lo utilizamos para comentar los cuadros estadísticos, el análisis y los resultados.

1.7.4 ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS DATOS

La información recopilada será analizada de la siguiente manera:

- Estadística descriptiva: que nos permitirá organizar y resumir los datos.
- Estadística inferencia: mediante la cual se realizarán las inferencias del análisis realizado a nuestra población a partir de las muestras extraídas.

Los datos obtenidos mediante la aplicación de los métodos y técnicas de recolección de datos, aplicadas la muestra (23 carpetas fiscales en las cuales se ha solicitado Proceso Inmediato en Flagrancia Delictiva en el año 2016) fueron analizados e incorporados al trabajo de investigación como información relevante que permitirá contrastar nuestra hipótesis con la realidad. Los datos recogidos serán sometidos a presiones porcentuales para ser

presentados como averiguaciones en forma de cuadros, gráficos estadísticos, etc.

CAPITULO II

I.- MARCO TEÓRICO

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Se puede indicar que en estos últimos años el índice de criminalidad ha crecido en demasía, el ciudadano no se siente seguro ni en su propia casa, ante ello opta por diferentes medidas de seguridad como son, vídeo vigilancia, enrejado de calles, contratación de vigilantes, adquisición de armas de fuego, pero no resultan suficientes, y proceden los arrestos ciudadanos y muchas veces la justicia por propia mano, conocido es “chapa tu choro y línchalo”, así como también la intervención de las rondas campesinas, reacciones de los ciudadanos que muchas veces tienen ese sinsabor de que su Estado no hace justicia pues las intervenciones a presuntos delincuentes terminan con una pronta libertad, o procesos larguísimos que demoran demasiado en emitir sentencias y es donde proceden las libertades procesales cumpliéndose el adagio “justicia tardía no es justicia” argumentado pues que el sistema judicial estaría fallando, por ende la ineficiencia e ineficacia judicial acrecentaba la desconfianza ciudadana y la justicia de propia mano. Aunado a ello se tiene las denominadas “cifras negras” que corresponde a aquellas víctimas de delitos que no denuncian por cuanto no confían en el sistema judicial, pues realizan un pronóstico de costo beneficio respecto a su tiempo, gasto económico y demora en la solución de conflicto que mejor deciden no denunciar fomentando el crecimiento de la impunidad.

El maestro Alfredo Araya Vega en su obra *“Anotaciones sobre el Proceso Inmediato”* nos dice que:

“Estudios científicos oficiales como el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente - ILANUD, Naciones

Unidas y Estado de la Nación, han estudiado la delincuencia latinoamericana, los resultados quizá nos sorprenderán. Existen tres tipos de delincuencias por atender: criminalidad organizada, delincuencia organizada y criminalidad tradicional. De la totalidad de asuntos, el 60% de los casos se trata de criminalidad convencional – delitos contra la propiedad en especial -; asuntos que por su alta repercusión afectan a la mayoría y merecen un tratamiento expedito. Diversos ordenamientos latinoamericanos (Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Honduras) han introducido nuevos procedimientos especiales de simplificación procesal que permitan un abordaje diferenciado para casos de simple y sencilla resolución de los de mayor complejidad investigativa. Así surgen los procesos de flagrancia como procedimientos desformalizados de respuesta judicial contra la ineficiencia e ineficacia del sistema y remedios contra la inseguridad ciudadana. En los ordenamientos, de previo a los procesos especiales, se han establecido planes pilotos que permitan dar vigencia a un nuevo sistema procesal acusatorio y sus principios, así como también se potencie la resolución de los conflictos penales de una manera más cercana al evento, dando vigencia al principio de justicia pronta y cumplida. Se trata de un mecanismo de prueba y error, que permita determinar las prácticas nocivas realizadas y mejorar la gestión de los procesos mediante la utilización de la tecnología como herramienta judicial. En Perú, del 15 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2015, funcionó un plan piloto para delitos en flagrancia y otros supuestos; solamente en el Distrito Judicial de Tumbes, el resultado no fue el esperado. La finalidad era potenciar la utilización del proceso inmediato establecido en el Código Procesal Penal de 2004 donde el Proceso Inmediato era “facultativo”; sin embargo la

Fiscalía presentó muy pocos casos mediante ese proceso especial (en 45 días solamente 8 casos)”⁴.

A fin de lograr resultados eficientes y eficaces, mejoras en la utilización del sistema procesal y políticas de seguridad ciudadana, se han incorporado leyes especiales que contribuyan a la disminución de los tiempos de espera, es por ello que el Congreso de la República delegó en el Poder Ejecutivo la potestad de legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y crimen organizado (Ley No. 30336 del 1 de Julio de 2015) en ese contexto emitió el 30 de agosto de 2015 El Decreto legislativo No. 1194, que entró en vigencia el 29 de noviembre de 2015, modificando los artículos 446°, 447° y 448° del Código Procesal Penal, siendo éstos dos últimos artículos modificados por el Decreto Legislativo No. 1307.

Bajo este supuesto el presente trabajo contribuirá con sus recomendaciones a la investigación científica, permitiéndonos conocer si la norma vigente, antes indicada, resultada eficaz para contrarrestar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado en nuestra provincia de Jaén.

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO INMEDIATO

1.2.1 ANTECEDENTES:

1.2.1.1 Nuevo Código Procesal Penal del 29 de Julio de 2004.

El Proceso Inmediato no es un proceso especial nuevo pues ya existía desde sus inicios con la promulgación del Decreto legislativo No. 957 del 29 de Julio de 2004, que implementó el Nuevo Código Procesal Penal en nuestro país, este proceso especial, es de raíces italianas y como tal tiene sus fuentes en dos instituciones, el *giudizio*

⁴ Araya A. (2015) “Anotaciones sobre el Proceso Inmediato”. Lima: Actualidad Penal. Actualidad Penal. Volumen 18. Diciembre 2015. Pág. 309-310.

direttissimo (juicio directo) y el giudizio immediato (juicio inmediato), cuya principal característica es obviar la etapa de investigación formalizada (instrucción, investigación preparatoria), además de la etapa intermedia y llegar al juicio oral, lo que origina un proceso más célere que respeta por tanto el plazo razonable del proceso y la presunción de inocencia.⁵

El Proceso Inmediato regulado en el Código Procesal Penal de 2004 se encuentra regulado en los artículos 446°, 447° y 448° del Libro Quinto – Sección I donde establecía que su incoación era “facultativa” para el Ministerio Público y se daba en tres supuestos: “a) el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito; o, b) el imputado ha confesado la comisión del delito; o, c) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes”.

Respecto a la audiencia de proceso inmediato según el artículo 448°, el Juez de la Investigación Preparatoria, previo traslado al imputado y a los demás sujetos procesales por el plazo de tres días, decidía directamente por escrito en igual plazo de tres días (sin necesidad de audiencia pública), si procede el proceso inmediato o si se rechaza el requerimiento fiscal. La resolución que emitía era apelable con efecto devolutivo. Notificado el auto que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procedía a formular acusación, la cual era remitida por el Juez de la Investigación Preparatoria al Juez Penal

⁵ Zelada, R. (2016) “*El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 60.

competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. De ser pertinente, antes de la formulación de la acusación, a pedido del imputado podía instarse la iniciación del proceso de Terminación Anticipada. Notificado el auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dictaba la Disposición que corresponda disponiendo la formalización o la continuación de la Investigación Preparatoria.

De igual manera el Juez de Juzgamiento cuando realizaba la admisión de los medios probatorios y dictaba el auto de enjuiciamiento y citación a juicio oral lo hacía por escrito; por tanto, la única oportunidad para constituirse en actor civil era al inicio del juzgamiento.⁶

La noción de evidencia delictiva, conforme al artículo 446°.1 del Código Procesal Penal, preside la conversión de un procedimiento común en inmediato, que a su vez autoriza la simplificación de sus trámites y el aceleramiento procesal – se concentra en los primeros momentos de la investigación preparatoria, en especial en la subfase de las diligencias preliminares, y se elimina la etapa intermedia -; por tanto, las características definitoria de este proceso es su celeridad, consecuencia del recorte de la actividad probatoria por falta de necesidad de la misma. Su configuración legal no está en función a la entidad del delito ni a la idea del consenso, sino a la presencia desde un primer momento de una circunstancia objetiva referida a la notoriedad y evidencia de elementos de cargo, que permiten advertir con visos de verosimilitud la realidad del

⁶ Bueno, L. (2017) “*La Procedencia de la Constitución de Actor Civil durante la Audiencia Única*”. Lima: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano No. 629. Febrero 2017. Lima – Perú. Pág. 8.

delito objeto de persecución procesal y la intervención del imputado. Para su incoación no se requiere la aceptación del imputado, sólo que el fiscal – y solo él – inste este procedimiento al juez de la investigación preparatoria. Con esta finalidad es necesario que se cumplan dos presupuestos: 1. Alternativamente (flagrancia delictiva, confesión, o evidencia delictiva propiamente dicha). 2. Declaración del imputado – de su posición procesal frente al interrogatorio depende en gran medida, en relación con las circunstancias objetivas de la causa, la incoación de este procedimiento acelerado⁷.

1.2.1.2 Acuerdo Plenario 6-2010-CJ/116 del 16 de noviembre de 2010. Con este acuerdo plenario se establece que conforme al artículo 447°.1 el Fiscal tiene la posibilidad de requerir la incoación del proceso inmediato, en dos momentos: i) luego de culminar las diligencias preliminares, ii) antes de los treinta días de formalizada la investigación preparatoria. En base al primer supuesto se estará ante un proceso inmediato incoado sin formalización de la investigación preparatoria, de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de Investigación Preparatoria y supuestos de aplicación que se producen. En cambio, en virtud del segundo supuesto, se tiene que el Proceso Inmediato, sí existe la obligación de Formalizar la Investigación Preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que se notifique de esta disposición al imputado a fin que conozca la imputación hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de defensa, o de ser

⁷ San Martín, C. (2016) “*Derecho Procesal Penal. El Proceso Inmediato (NCPP originario y D. Leg No. 1194)*”. Lima: Gaceta Penal No. 79. Enero 2016. Lima – Perú. Pág. 153.

el caso interponer los medios de defensa técnicos que considere pertinentes (Fundamento 15).

En su Fundamento 17 determina que en el Proceso Inmediato, al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva, confesión del imputado, y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedia.

Establece que el Juez realiza dos controles: El primero es el control al requerimiento del Fiscal para la incoación del proceso inmediato, lo cual permite al Juez de la Investigación Preparatoria determinar si procede o no dar inicio a un proceso inmediato, para lo cual es preciso que se verifique el cumplimiento de los supuestos de aplicación de este proceso. El segundo es el de la acusación fiscal, que lo realizará el Juez de Juicio Oral quien dictará el auto de enjuiciamiento en virtud del artículo 448.2 del CPP. (Fundamento 18). Respecto a las medidas coercitivas estas se solicitarán de manera simultánea y separada del requerimiento de incoación del proceso inmediato, que será discutido en audiencia.

El acuerdo plenario en mención establece que cabe la posibilidad de permitir que el ofrecimiento de pruebas (sobre todo por parte del imputado) sea al inicio del Juicio Oral ante el Juez del Juzgamiento y será este quien ha de realizar un control sobre los medios de prueba ofrecidos. (Fundamento 20). Así también los sujetos procesales tendrán, al inicio del juicio oral, oportunidad para solicitar su constitución en el proceso (Fundamento 23).

1.2.1.3 Decreto Legislativo No. 1194 del 29 de agosto de 2015.

Determina la vigencia el Proceso inmediato reformado en todo el país donde se establece que el Fiscal DEBERÁ solicitar proceso inmediato en todos los casos de flagrancia delictiva, bajo responsabilidad.

1.2.1.4 Directiva 005-2015-MP-FN. Esta Directiva en su numeral

8 ha establecido que “Al término del plazo de la detención policial, en caso de flagrancia delictiva, el fiscal debe solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria (en los Distritos Fiscales donde se aplica el Código Procesal Penal de 2004) y al Juez Penal (en los distritos fiscales donde no se aplica en su totalidad el referido Código), la incoación del proceso inmediato, siempre y cuando tenga los suficientes medios de prueba.

1.2.1.5 Acuerdo Plenario 002-2016/CIJ-116 del 01 de junio de 2016.

Podemos destacar que respecto al orden del pronunciamiento judicial en la audiencias de procesos inmediatos afirmó que si la ley fija un orden para resolver los puntos planteados es inexcusable que ese orden tiene que respetarse, haciendo alusión que el Juez debe pronunciarse primero por la medida coercitiva, luego por las manifestaciones de justicia negociadas y finalmente por el proceso inmediato (Fundamento 23).

1.2.1.6 Decreto Legislativo No. 1307.

Publicado el 29 de diciembre de 2016, que modificó los artículos 447 y 448 del Decreto Legislativo No. 1194, cuyos detalles desarrollaremos más adelante.

1.2.2 NOCIONES GENERALES DE PROCESO INMEDIATO

1.2.2.1 CONCEPTO:

Es un proceso especial que atiende al criterio de simplificación procesal, pues busca abreviar al máximo el procedimiento. La finalidad de este proceso especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio Público de formular directamente acusación y que ésta sea aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia. Se trata del proceso con potencialidad para convertirse en uno de los más comunes dadas las características singulares que tiene, lo cual dependerá de realizar una eficiente investigación preliminar⁸.

El proceso inmediato es un proceso penal especial y además una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación⁹.

1.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO INMEDIATO

a) Es obligatorio: a partir de la modificatoria del proceso inmediato ya no será opcional para el Fiscal sino que el

⁸ Sánchez, P. (2016). “*El Nuevo Proceso Penal*”. Lima: Editorial Moreno SA. Abril 2009. Lima – Perú. Pág. 364-365.

⁹ Sumire, E. (2016) “*Las Garantías y la Eficacia en el Proceso Inmediato*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 40.

mismo tendrá la obligación de incoarlo cuando esté frente a cualquiera de los cinco supuestos enunciados como presupuestos materiales. La falta de cumplimiento conlleva la responsabilidad funcional, de los Fiscales, salvo que motivadamente estén ante un supuesto de excepción también previsto en la Ley.

- b) Es restrictivo de la libertad:** esto es – en virtud de los supuestos de la flagrancia – que el imputado va a permanecer detenido durante 24 horas, además que dicha detención se va a mantener hasta que se lleve a cabo la audiencia de incoación del proceso inmediato, pero dicha detención podrá ser prolongada hasta 48 horas adicionales.
- c) Celeridad:** el proceso ha sido diseñado para que cada acto procesal del órgano persecutor así como del órgano jurisdiccional se realice en un tiempo breve, incluso los plazos son contemplados en horas y el plazo mayor no excede las 72 horas.
- d) Audiencias inaplazables:** en el proceso inmediato se realizan dos audiencias, ambas tienen la condición de inaplazables, es decir son impostergables.
- e) Es sancionador:** porque el incumplimiento de los plazos genera responsabilidad funcional en los infractores, ya sean jueces o fiscales, incluso al abogado defensor que no asista a la audiencia única de incoación del proceso inmediato o la audiencia única de juicio inmediato.
- f) Es garantista:** porque las decisiones trascendentales se toman en audiencia bajo los principios de inmediación,

oralidad, contradicción y publicidad, conforme lo exige el sistema acusatorio.

g) Citación de parte: las partes ya no se van a limitar a coadyuvar con la notificación de sus órganos de prueba, recayendo en el Juez la responsabilidad de su notificación, sino que la parte que los ofreció se hace responsable de su citación y de garantizar su concurrencia a la audiencia única de juicio inmediato. En caso ello no ocurra, el apercibimiento es que se prescinda del órgano de prueba, sin que previamente exista un apercibimiento de conducción compulsiva como ocurre en el proceso común.

h) Impugnable: la resolución que admite o rechaza la incoación del proceso inmediato es apelable, lo que posibilita la revisión de la decisión en una instancia superior.

i) Excepcional: esto en virtud que la regla general en el código adjetivo es la vía del proceso común, en tanto que los procesos especiales son de aplicación excepcional. Es por ello que está la exigencia de condiciones particulares para su procedencia¹⁰.

1.2.2.3 PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

a) Principio acusatorio: consiste en la potestad del titular del ejercicio de la acción penal de formular la acción

¹⁰ Tejada, J. (2016) “*El Proceso Inmediato y su aplicación en los primeros cien días*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti. Año 1. No. 1. Marzo 2016. Lima – Perú. Pág. 57.

penal ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes de prueba válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente identificado. La dimensión práctica del acusatorio se concreta mediante el acto procesal penal que se denomina acusación. Sin acusación previa y válida no hay juicio oral. En virtud de este principio se reconoce nítidamente la separación de funciones para el desarrollo del proceso penal: al Ministerio Público le corresponde la función requirente, la función persecutoria del delito, por ello es el titular del ejercicio de la acción penal pública y de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio y está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado, con esa finalidad controla y conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional. En tanto que al órgano jurisdiccional le corresponde la función decisoria, la función de fallo; dirige la etapa intermedia y la de juzgamiento; le corresponde resolver los conflictos de contenido penal, expidiendo las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley (artículos IV y V del Título Preliminar del NCPP). El contenido intrínseco al principio acusatorio, es la necesidad del requerimiento del Ministerio Público para iniciar el procedimiento se trata de una exigencia que impide que el tribunal inicie de oficio a la investigación o someta a proceso al imputado de oficio. El juez por iniciativa propia no puede investigar o poner en marcha o impulsar el proceso. En consecuencia, el Principio Acusatorio implica la necesaria diferencia entre el ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la potestad

jurisdiccional, por ello el titular de la potestad persecutoria del delito, de la pena y del ejercicio pública de la acción penal es el Ministerio Público; en tanto que al Poder Judicial le corresponde exclusivamente dirigir la etapa intermedia y la etapa procesal del juzgamiento.

- b) Principio de igualdad de armas:** el NCPP garantiza expresamente este principio como norma rectora del proceso al disponer en el numeral 3 del artículo I del Título Preliminar: “Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”. Todos los ciudadanos que intervengan en un proceso penal, recibirán idéntico tratamiento procesal por parte de los órganos de la jurisdicción penal. Este principio es esencial en un sistema acusatorio adversarial cuyo desarrollo depende de las partes y en el que la imparcialidad del juez está garantizada; aquí se nota con nitidez la neutralidad al punto que no puede disponer de oficio la realización del proceso, ni la realización de pruebas, salvo las excepciones previstas en la Ley.
- c) Principio de contradicción:** consiste en el recíproco control de la actividad procesal y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto. Se concreta poniendo en conocimiento de los demás sujetos procesales el pedido o medio de prueba presentado por alguno de ellos; así el acusado podrá contraponer argumentos técnicos jurídicos a los que exponga el acusador. El contradictorio sustenta la razón

y conveniencia del interrogatorio cruzado en la audiencia y el deber de conceder a cada sujeto procesal la potestad de indicar el folio a oralizar. Este principio rige el desarrollo de todo el proceso penal, pero el momento culminante del contradictorio acontece en la contraposición de los argumentos formulados en la requisitoria oral del Fiscal (acusación) y los argumentos de la defensa del acusado y ello nos permite conocer la calidad profesional del acusador y de los defensores. Este principio rige todo el debate donde se enfrentan intereses contrapuestos y se encuentra presente a lo largo del juicio oral, lo cual permite que las partes tengan: i) el derecho a ser oídas por el tribunal, ii) el derecho a ingresar pruebas, iii) el derecho a controlar la actividad de la parte contraria, y iv) el derecho a refutar los argumentos que puedan perjudicarle. Este principio exige que toda la prueba sea sometida a un severo análisis de tal manera que la información que se obtenga de ella sea de calidad a fin de que el Juez pueda tomar una decisión justa. Por tal razón quienes declaren en el juicio (imputados, testigos y peritos) y en general en las audiencias orales, serán sometidos a interrogatorio y contra interrogatorio. Además permite que la sentencia se fundamente en el conocimiento logrado en el debate contradictorio, el cual ha sido apreciado y discutido por las partes.

- d) Principio de inviolabilidad del derecho a la defensa:** consagrado en el inciso 14 del artículo 139 de nuestra Constitución, así también en el artículo IX del Título Preliminar del NCPP que prescribe: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y

detalladamente la imputación formulada en su contra y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso por un abogado de oficio desde que es citada o detenida por una autoridad”, es decir garantiza el derecho a contar con un abogado defensor, un profesional en derecho que ejerza la defensa técnica. El nuevo código configura el derecho de defensa desde una perspectiva amplia; es esencial garantizar este derecho porque así se posibilita el ejercicio de los demás derechos reconocidos por la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las normas procesales. Para promover la efectiva vigencia de este derecho, se garantiza la asistencia de un traductor o intérprete cuando no se habla el idioma del tribunal, la información del hecho, la libertad que tiene el imputado para decidir si declara o guarda silencio; la posibilidad real y concreta que pueda comunicarse con su defensor y de contar con el tiempo suficiente para preparar su defensa y ofrecer medios probatorios y la posibilidad de recurrir.

- e) **Principio de la presunción de inocencia:** es uno de los pilares del proceso penal acusatorio, reconocido como el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia en tanto no recaiga sobre ella una sentencia condenatoria. Este principio está vigente a lo largo de todas las etapas del proceso y en todas las instancias, sólo puede ser desvirtuado a través de la actividad probatoria con las siguientes notas esenciales: i) la carga de la prueba corresponde exclusivamente a la parte acusadora (Ministerio Público) y no a la defensa; aquél ha de probar en el juicio los elementos constitutivos de la pretensión penal, ii) la prueba debe practicarse en el

juicio oral bajo inmediación del órgano jurisdiccional, con las debidas garantías procesales. El juez penal que juzga, solo queda vinculado a lo alegado y probado en el juicio oral, iii) las pruebas deben ser valoradas, con criterio de conciencia por jueces ordinarios, competentes, independientes e imparciales. Este principio está en íntima relación con el derecho a la libertad que la Constitución garantiza a toda persona, por ello en el marco de un proceso acusatorio todas las medidas coercitivas en general y la prisión preventiva en particular, tienen carácter excepcional y provisional, sólo podrán imponerse cuando haya peligro procesal, es decir, peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria.

- f) **Principio de publicidad de juicio:** se fundamenta en el deber de que asume el Estado de efectuar un juzgamiento transparente, esto es facilitar que la nación conozca por qué, cómo, con qué pruebas, quiénes, etc. realizan el juzgamiento de un acusado. Este principio de vital importancia es una forma de control ciudadano al juzgamiento. Consiste en garantizar al público la libertad de presencia el desarrollo del debate y en consecuencia de controlar la marcha de él y la justicia de la decisión misma. La publicidad es considerada como una garantía del ciudadano sometido a juicio y a la vez como un derecho político de cualquier ciudadano a controlar la actividad judicial. La finalidad de la publicidad es que el procesado y la comunidad tengan conocimiento sobre la imputación, la actividad probatoria y la manera como se juzga, así la comunidad podrá formarse un criterio propio sobre la manera como se administra justicia y la calidad de la misma. La regla general es que los juicios deben

ser públicos, salvo cuando sea necesario para preservar los intereses de la justicia, de este modo ha sido recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8 inciso 5). Nuestra Ley señala la excepción al Principio de Publicidad cuando se trate de tutelar intereses superiores, tal es el caso del derecho al honor de una persona y en los casos de delitos contra la libertad sexual.

- g) Principio de oralidad:** quienes intervienen en la audiencia deben expresar a viva voz sus pensamientos. Todo lo que se pida, pregunte, argumente, ordene, permita, resuelva será concretado oralmente, pero lo más importante de las intervenciones será documentado en el acta de audiencia aplicándose un criterio selectivo. La oralidad es una característica inherente al Juicio Oral e “impone que los actos jurídicos procesales constitutivos del inicio, desarrollo y finalización del juicio se realicen utilizando como medio de comunicación la palabra proferida oralmente; esto es, el medio de comunicación durante el juzgamiento viene a ser por excelencia, la expresión oral, el debate contradictorio durante las sesiones de la audiencia es protagonizado mediante la palabra hablada”. La necesidad de la Oralidad de la audiencia es indiscutible, en tanto se requiere el debate entre los intervinientes, por ello está íntimamente ligado al llamado Principio de Inmediación.
- h) Principio de inmediación:** es el acercamiento que tiene el juzgador con todos los elementos que sean útiles para emitir sentencia. Rige en dos planos: i) en la relación entre quienes participan en el proceso y el tribunal, lo que exige la presencia física de las personas. La vinculación entre los acusados y la Sala penal que juzga,

es una inmediatez que se hace efectiva a través de la Oralidad. El Principio de Inmediación impide junto al principio contradictorio, que una persona pueda ser juzgada en ausencia. ii) en la recepción de la prueba, para que el juzgador se forme una clara idea los hechos y para que sea posible la defensa se requiere que la prueba sea practicada en el juicio. La inmediación da lugar a una relación interpersonal directa, frente a frente, cara a cara, de todos entre sí: acusado y juzgador, acusado y acusador, acusado y defensores, entre éstos con el juzgador y acusador, el agraviado y el tercero civil. El juzgador conoce directamente la personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, así como del agraviado, del tercero civil, del testigo o perito. En consecuencia la inmediación es una necesidad porque es una de las condiciones materiales imprescindibles para la formación y consolidación del criterio de conciencia con el que será expedido el fallo.

- i) **Principio de identidad personal:** según este principio, ni el acusado, ni el juzgador pueden ser reemplazados por otra persona durante el juzgamiento. El acusado y el juzgador deben concurrir personalmente a la audiencia desde el inicio hasta la conclusión. El juzgador viendo, oyendo, preguntando, contrastando, analizando la actitud y el comportamiento del acusado, agraviado, testigo y perito, podrá adquirir un conocimiento integral sobre el caso. Este conocimiento directo e integral no sería posible si durante el juicio oral se cambiara al juzgador, pues el reemplazante no tendrá idea sobre la parte ya realizada y su conocimiento será fragmentario e incompleto. Por eso, los integrantes de la Sala Penal

deben ser los mismos desde el inicio hasta el final del juicio oral.

- j) **Principio de unidad y concentración:** la audiencia tiene carácter unitario. Si bien puede realizarse en diferentes sesiones, éstas son partes de una sola unidad. Esto debido a la necesidad de continuidad y concentración de la misma. La audiencia debe realizarse en el tiempo estrictamente necesario, las sesiones de audiencia no deben ser arbitrariamente diminutas ni indebidamente prolongadas. Así una sesión que termina es una suspensión, no una interrupción del juicio. La razón de este principio está en que el juzgador oyendo y viendo todo lo que ocurre en la audiencia, va reteniendo en su memoria, pero cuanto más larga sea la audiencia se va diluyendo dicho recuerdo y podría expedir un fallo no justo. El Principio de Concentración está referido, primero, a que en la etapa de juicio oral serán materia de juzgamiento solo los delitos materia de la acusación fiscal. Todos los debates estarán orientados a establecer si el acusado es culpable de esos hechos. Si en el curso de los debates resultasen los indicios de la comisión de otro delito, éste no podrá ser juzgado en dicha audiencia. En segundo lugar, el Principio de Concentración requiere que entre la recepción de la prueba, el debate y la sentencia exista la “mayor aproximación posible”. Este principio está destinado a evitar que en la realización de las sesiones de audiencia de un determinado proceso, se distraiga el accionar del Tribunal con los debates de otro. Es decir, que la suspensión de la audiencia exige que cuando los Jueces retomen sus actividades, continúen con el conocimiento

del mismo proceso, a fin de evitar una desconcentración de los hechos que se exponen¹¹.

1.2.3 SEGURIDAD CIUDADANA

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de garantizar este derecho de la persona en términos de un elenco de normas fundamentales; así, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este derecho fundamental se ve reflejado en el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú en tanto señala que **“toda persona tiene derecho a la seguridad personal”** y, de forma mas específica, respecto de hechos violentos, en el literal h, al establecer que **“nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes”**. A consideración de la Comisión Interamericana se exige la protección de los derechos afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo de la seguridad ciudadana e integrado por el derecho a la vida, integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, lo que guarda relación con la función delegada a la Policía Nacional del Perú en el artículo 166 de la Constitución al considerar que su función es garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia y el servicio que deben brindar las municipalidades establecido en el artículo 197 de la Carta Fundamental al considerar que deben brindar servicios de seguridad ciudadana,

¹¹ Mendoza, G. (2016). “El Proceso Inmediato en el Proceso Penal Peruano. Aplicación del Decreto Legislativo 1194”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti. Año 1. No. 1. Marzo 2016. Lima – Perú. Pág. 92-99.

con la cooperación de la Policía Nacional del Perú. Los derechos comprometidos en la política pública sobre seguridad ciudadana considerados por la Comisión están relacionados con los literales establecidos en el artículo 24 de la Constitución del Perú y sin desconocer la especial protección que merecen las víctimas del delito de omisión a la asistencia familiar, la seguridad ciudadana claramente se refiere a objeto jurídico distinto.¹²

1.2.4 CRIMEN ORGANIZADO

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), define al grupo delictivo organizado como:

“un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”¹³.

Se puede apreciar, en esta definición, algunos elementos que la doctrina venía –y viene– considerando fundamentales para la existencia de una organización criminal en estricto. Este es el caso del **beneficio económico**, que da forma a una criminalidad de tipo empresarial donde la organización “se plantea como objetivo principal la obtención de un lucro por medios ilícitos”. Esta es una de las razones por la que algunos ordenamientos no incluyen

¹² Salas, J. (2016) “*Cuestiones Problemáticas del Proceso Inmediato según el Decreto Legislativo No. 1194*”. Lima: Gaceta Jurídica SA. Primera Edición Octubre 2016. Lima – Perú. Pág. 35-36.

¹³ Artículo 2 literal a) de la “*Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*” – Convención de Palermo.

dentro del ámbito de aplicación de las normas sobre crimen organizado a las organizaciones terroristas.

Otro elemento característico de una organización criminal es, valga la redundancia, **la organización**; ahora bien, este componente lleva de suyo la existencia de un grupo de personas, pero hay que tener en cuenta que no se trata de la simple suma o pluralidad de agentes, ni tiene por qué confundirse [la organización criminal] con la mera coautoría. Así, para establecer la diferencia entre ambas [entre coautoría y organización criminal] debe atenderse a este elemento configurador propio de las organizaciones criminales: su estructura organizativa. Intrínsecamente ligado a este elemento es el de la **permanencia**, el mismo que reproduce la imagen material del potencial criminógeno de la delincuencia organizada, resultando imprescindible para lograr que su presencia e influencia se irradian y conserven sobre su entorno. Desde luego, las organizaciones criminales pueden presentar características adicionales, como la búsqueda de impunidad; el secretismo o clandestinidad; las vinculaciones con el mundo empresarial (inocultablemente relacionado con el lavado de activos) o con la política (generadora de grandes cotas de corrupción); la búsqueda del dominio del mercado, y el carácter transnacional o internacional de sus actividades.

Según este proceder, debemos empezar por descartar aquellas agrupaciones o asociaciones, por más organizadas que fuesen, que no se dediquen a la perpetración de delitos graves. Consecuentemente, deben quedar fuera aquellas que se dediquen a la comisión de meras faltas. También podemos dejar fuera de un concepto estricto de organización criminal, a los grupos terroristas; más allá de que teleológicamente no estén dirigidos a la consecución de un beneficio económico o que no hayan sido comprendidos por la Ley 30077, la confrontación con el Estado,

cuando no la búsqueda de su destrucción o del socavamiento de sus estructuras, hace que merezcan un tratamiento –aunque similar– diferenciado frente a otras organizaciones criminales. Deben quedar al margen del concepto de organización criminal las comúnmente denominadas “bandas”, pues estas carecen propiamente de una estructura organizacional estable¹⁴.

¹⁴ http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20140308_02.pdf

CAPITULO III

EL PROCESO INMEDIATO EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL

Actualmente el Proceso Inmediato a nivel nacional se rige por el Decreto Legislativo No. 1194 que fue promulgado el 29 de agosto de 2015 que modifica los artículos 446°. 447° y 448° del NCPP, siendo estos dos últimos artículos modificados por el Decreto Legislativo No. 1307 que fue promulgado el 29 de diciembre de 2016.

1. ARTÍCULOS 446, 447 Y 448 DEL NCPP

“Artículo 446.- Supuestos de aplicación.

1. El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259...”¹⁵;

Para entender con claridad este literal debemos desarrollar en términos del maestro César San Martín Castro¹⁶, conceptos de:

1.1. Flagrancia: la palabra “flagrante” del latín flagrans, flagrantis, participio del verbo flaglare que significa arder o quemar, refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama y que, por lo tanto, se está realizando actualmente. Es una situación fáctica en la que el sujeto es sorprendido en el momento de delinquir o

¹⁵ Decreto legislativo 1194 del 29 de agosto de 2015. Artículo 446°.

¹⁶ San Martín, C. (2016) “*Derecho Procesal Penal. El Proceso Inmediato (NCPP originario y D. Leg No. 1194)*”. Lima: Gaceta Penal No. 79. Enero 2016. Lima – Perú. Pág. 154-155.

en circunstancias inmediatas a la comisión del delito. Habrá flagrancia cuando el autor del hecho punible es sorprendido, inmediatamente después de cometerlo o mientras sea perseguido o cuando tenga objetos, presente algún vestigio que haga presumir que acaba de cometer o participar en un ilícito. Se puede advertir cuatro notas esenciales, a saber:

- a) **La inmediatez temporal**, es decir, que el delito se esté cometiendo o desarrollando o que se haya cometido instantes antes.
- b) **La inmediatez personal**, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. Relación directa del imputado con la cosa, instrumento, objeto o efecto del delito.
- c) **Percepción directa** de la situación delictiva.
- d) **Necesidad de urgencia** de la intervención para evitar la consumación o agotamiento del delito o desaparición de los efectos del mismo. El delito flagrante encierra en sí la prueba de su realización por existir una percepción sensorial directa del hecho delictivo, de suerte que la flagrancia se ve, no se demuestra, apareciendo vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria.

En este sentido se tiene que la flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional que debe entenderse como una evidencia del hecho delictuoso respecto de su autor. Así, la flagrancia se configurará cuando exista un

conocimiento fundado, directo e inmediato del hecho punible que se viene realizando o que se acaba de realizar instantes antes, situación en la que, por su particular configuración, es necesaria la urgente intervención de la Policía para que actúe conforme a sus atribuciones. En este sentido, lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para privar de la libertad a una persona es la situación particular de la urgencia que, en el caso, concurriendo los requisitos de inmediatez temporal e inmediatez personal de la flagrancia delictiva, comporta su necesaria intervención policial¹⁷.

1.1.1 Principios de la flagrancia:

a) Fumus commissi delicti: conocido como atribución del delito, requiere la existencia de percepción directa e inmediata del tercero de la comisión del delito o bien en parte de la fase de la ejecución del mismo, hasta lograrse su aprehensión. En caso de consumación del delito es indispensable una conexión material; huellas, instrumentos, entre otros, entre la comisión del ilícito y el sujeto vinculado al hecho delictivo.

b) Periculum libertatis: parte de la necesidad de la intervención. Se refiere a que, ante el descubrimiento, urge la aprehensión del sujeto, para hacer cesar el delito, frustrar la huida, evitar el ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del hecho, esto es, la obtención de pruebas que

¹⁷ Zelada, R. (2016) “*El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 62.

desaparecería si se acudiera a solicitar la autorización judicial.

1.1.2 Tipos de flagrancia:

a) Flagrancia Clásica, en estos casos de flagrancia debe recordarse que se autoriza al tercero a lograr la aprehensión del responsable, facultad inspirada en la obligación que tienen los particulares de auxiliar a la autoridad pública en el combate de la delincuencia y en hacer valer sus derechos de víctima, siempre y cuando resulte proporcionada la acción a partir del supuesto de hecho en que ocurre, para cumplir con los fines políticosociales de justicia y lograr la detención del responsable junto con la obtención de los elementos probatorios necesarios para su juzgamiento. En estos casos el sujeto es detenido, conforme al adagio popular, con las manos en la masa, cumpliéndose con una inmediatez personal (presencia física del investigado en el momento), inmediatez temporal (el sujeto perpetra el hecho punible en el momento o instantes antes de su detención, tercero percibe responsable) y detención inmediata del responsable (intervención de un civil – tercero – o la policía)¹⁸.

b) Cuasiflagrancia, abarca al individuo que logra huir de la escena del delito, pero es perseguido e inmediatamente detenido después de cometerlo o intentarlo - no se exige la percepción directa de la

¹⁸ Zelada, R. (2016) “*El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 62, citando a ARAYA VEGA, Alfredo. “Nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia”. Jurista Editores. Lima - Perú, 2016. Pág. 73.

comisión delictiva. En este supuesto procesal están presentes los siguientes elementos: La inmediatez personal y temporal (El autor es percibido, perseguido y detenido, luego de realizar el hecho delictivo), percepción sensorial directa (por la víctima, terceros o agentes policiales), persecución inmediata y sin interrupción (luego del hecho el sospechoso huye y es perseguido de manera inmediata y sin interrupción, es decir, no cesó la acción de aprehensión; también es posible que se trate de una persecución sucesiva, cuando un sujeto persigue y al no poder detener al responsable pide a otro que continúe la persecución y logre su aprehensión, en este caso se trataría de una percepción indirecta del hecho según las circunstancias)¹⁹.

c) Flagrancia Presunta, conocida también como flagrancia evidencial, diferida, virtual o ex post ipso, en cuya virtud el sujeto es detenido, sin que su presencia en el teatro de los hechos conste de modo directo, al ser encontrado dentro de las veinticuatro horas de la comisión del delito con bienes delictivos en su poder que denoten su probable autoría o participación criminal – de la evidencia se pasa cualitativamente, a la probabilidad, ciertamente lejana y de dudosa base convictiva²⁰.

¹⁹ Zelada, R. (2016) “*El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica *Ius In Fraganti*. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 63, citando a ARAYA VEGA, Alfredo. Nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia. Jurista Editores. Lima - Perú, 2016. Pág. 73.

²⁰ San Martín, C. (2016) “*Derecho Procesal Penal. El Proceso Inmediato (NCPP originario y D. Leg No. 1194)*”. Lima: Gaceta Penal No. 79. Enero 2016. Lima – Perú. Pág. 155.

En ella se parte de las presunciones para su determinación, se equipara al sujeto base. El perpetrador no es sorprendido en ninguna fase del iter criminis (ni ejecución ni consumación), es decir no se le sorprende ni ejecutando ni consumando el hecho, tampoco es perseguido luego de su comisión. Solo existen indicios razonables que harían suponerlo autor del hecho. Este supuesto coincide con la determinación normativa del supuesto en el tiempo inmediato a la comisión del delito el sujeto fuere encontrado con rastros, señales, armas o instrumentos utilizados en la comisión del hecho; o señalado por las víctimas o por testigos presenciales como el autor del delito. Los elementos presentes en esta delincuencia son: inmediatez personal (hallazgo del responsable), percepción sensorial directa de materialidad (podría tratarse de los instrumentos, objetos, astros, huellas, vestimentas o cualquier medio que permita relacionar al sujeto con el hecho), inmediatez temporal (existe un vacío normativo que debe ser llenado por el operador jurídico al establecerse el "acaba de cometerlo") y aprehensión del responsable de forma próxima en el tiempo y de manera material al evento²¹.

“b) El imputado ha confesado la comisión del delito, en los términos del artículo 160”²²;

Confesión.- regulada en el artículo 160 del Nuevo Código Procesal Penal, la cual debe ser entendida como la admisión por parte del

²¹ Zelada, R. (2016) “*El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 64, citando a ARAYA VEGA, Alfredo. “Nuevo proceso inmediato para delitos en flagrancia”. Jurista Editores. Lima - Perú, 2016. Pág. 73.

²² Decreto legislativo 1194 del 29 de agosto de 2015. Artículo 446°.

imputado de los cargos que se le atribuyen, a través de la narración verdadera de lo sucedido.

El jurista nacional José Antonio Neyra Flores citado por René Zelada Flores en su obra *“El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de aplicación”* refiere que:

“la confesión es el acto procesal que consiste en la declaración necesariamente personal, libre, consciente, sincera, verosímil y circunstanciada que hace el procesado, ya sea durante la investigación o el juzgamiento, aceptando total o parcialmente su real autoría o participación en la perpetración del delito que se le imputa. Dicha declaración puede contener alegaciones encaminadas a atenuar y excluir la pena”²³.

De igual manera el maestro César San Martín Castro citado por René Zelada Flores en su obra *“El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de aplicación”²⁴*, señala que:

“está definida legalmente por el artículo 160.1 NCPP, desde una perspectiva funcional debe entenderse como el reconocimiento del imputado de la participación en el hecho objeto de imputación. El procesado debe admitir los cargos o imputación formulada en su contra, es decir, reconocer la comisión de los hechos incriminados. Es la declaración en la que el imputado reconoce su participación en el ilícito que se le incrimina. Por lo demás, ese testimonio debe ser intrínsecamente válido,

²³Zelada, R. (2016) *“El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 64, citando a NEYRA FLORES, José Antonio. “Manual de Derecho Procesal Penal y de Litigación Oral”. DE-MSA. Lima - Perú, 2010. Pág. 434.

²⁴ Zelada, R. (2016) *“El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 64, citando a SAN MARTÍN CASTRO, César. “Derecho procesal penal – Lecciones”. Conforme el código procesal penal de 2004. Jurista Editores. Perú, 2015. Pág. 805.

es decir, prestado libremente y en estado normal de las facultades psíquicas del declarante ante el fiscal en presencia de su abogado. En efecto, la confesión es el acto procesal que consiste en la declaración personal, libre, consciente, sincera, verosímil y circunstanciada que hace el procesado durante la investigación o durante el juicio oral, aceptando las cargos que se le atribuye [Neyra]. Es la intención del imputado de auxiliar a la justicia facilitar la investigación de los hechos que se le inculpa y colaborar con la reparación del daño. Por las características del enjuiciamiento no hace falta la presencia de una prueba corroborante categórica-aunque sí de mínimos elementos que le concedan cierta verosimilitud o solvencia probatoria-, pues para ello está el debate oral, que no se elimina con este procedimiento; por tanto, es plenamente factible la posibilidad de una absolución”.

En efecto, el juez, pese a la confesión, debe practicar todas las diligencias que crea conveniente para convencerse de la veracidad de la confesión y existencia de delito de acuerdo a la naturaleza del delito.

Constituye doctrina procesalista mayoritaria concebir una limitación respecto de los alcances de la confesión. No se acepta como tal la llamada “confesión calificada”, en cuya virtud el imputado agrega circunstancias justificantes o exculpatoria. Se entiende que en ese caso no se trataría de propiamente de la admisión del hecho atribuido y apartaría el caso de la lógica de simplicidad y facilidad probatoria que aconseja este procedimiento.

El beneficio de la confesión es la disminución de la pena hasta en una tercera parte por debajo del mínimo legal. La disminución de

la pena obedece a las facilidades procesales que produce la declaración de la persona que realiza la confesión, por tanto, contribuye a una pronta resolución del caso y a una sentencia justa. Es la valoración de la conducta del imputado – que realiza la confesión sincera – como un acto de colaboración y ayuda con la administración de justicia. Evidencia un temprano reconocimiento de su culpabilidad y evita los sucesivos trámites de investigación. Cabe precisar que este beneficio no es aplicable en el supuesto de flagrancia - obviamente aceptable en función del fundamento político criminal de la institución – ni de reincidencia y habitualidad – de dudosa legitimidad en cuanto a la objetividad de las reglas de distinción en relación con el motivo de justificación del beneficio instituido – conforme lo estipula el artículo 161 del NCPP modificado por la Ley No. 3007 del 19 de agosto de 2013. No opera la confesión sincera cuando el imputado i) está plenamente identificado y localizado, ii) tiene en su contra indicios sobre su responsabilidad criminal, iii) se enteró que la policía lo buscaba, iv) muestra voluntariamente su vivienda, pero ya se había acordado la diligencia de registro, y v) confiesa luego de la detención²⁵.

“c) Los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio del imputado, sean evidentes”²⁶.

Evidencia delictiva. Este también es un presupuesto que ya existía, y se encuentra conformado por dos partes:

- **Elementos de convicción suficientes**, compuesto por toda la evidencia adquirida durante la investigación, que acreditan la existencia del hecho delictuoso y su vinculación con el imputado.

²⁵ San Martín, C. (2016) “*Derecho Procesal Penal. El Proceso Inmediato (NCPP originario y D. Leg No. 1194)*”. Lima: Gaceta Penal No. 79. Enero 2016. Lima – Perú. Pág. 156.

²⁶ Decreto legislativo 1194 del 29 de agosto de 2015. Artículo 446°.

Es decir, deben presentarse actos de investigación o actos de prueba preconstituída que permitan establecer, de modo cierto, claro, patente y manifiesto, la realidad del delito y la vinculación del imputado con su comisión. Debe existir en la causa, con independencia de la posición procesal del imputado y como consecuencia de las diligencias preliminares, datos sólidos que produzcan convicción razonable de la realidad del delito y de la vinculación del imputado con su comisión. Desde luego, se trata de un conocimiento del hecho y de su autor especialmente claro en esta fase del procedimiento de averiguación, que no se preste a polémicas fundadas o que adolezca de ciertas lagunas que determine la necesidad de actos de investigación adicionales o de corroboración. El juez de la investigación preparatoria ha de poder revisar el mérito de las actuaciones de investigación y llegar a un estándar de suficiencia razonable, que permita comprobar, a través de la presencia de determinados antecedentes, los elementos esenciales de la imputación, tanto en lo que se refiere al delito imputado, la participación y las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal atribuidas al hecho o al autor.

- **Interrogatorio del imputado**, el cual implica la existencia de cuando menos una citación a declarar, sobre este último punto se sostiene también que no basta una invitación a declarar sino, que debe existir una declaración ya sea aceptando o negando los hechos, no pudiendo ser considerada declaración el ejercicio de su derecho al silencio, ahora si bien dicha posición bajo un contexto literal tiene sentido en la práctica motivaría que el fiscal, pese a contar con todos los elementos necesarios para vencer en juicio al procesado, se vea obligado a discurrir por un proceso más lato, sólo porque el acusado se negó a concurrir cuando fue citado, o que habiendo concurrido hizo uso de su derecho al silencio, deviniendo ello en irrazonable, siendo estas

circunstancias, las que ameritan el decantamiento por la primera postura, considerando que de contar el fiscal con los elementos suficientes que le hagan prever una eventual victoria en juicio, no debería estar sujeto a la postura del procesado, por tanto no tendría impedimento alguno en incoar el proceso inmediato si éste no concurre o se abstiene a declarar. De similar posición también es el maestro SAN MARTIN CASTRO cuando refiere que como quiera que el Nuevo Código Procesal Penal reconoce como derecho fundamental la libertad de declaración, y por ende, que el imputado tiene derecho al silencio, es posible que éste no se someta al interrogatorio, por lo que cabe preguntarse si dicho obstáculo procesal impide la incoación del procedimiento inmediato. Tal obstáculo puede ocurrir tanto en los casos de flagrancia delictiva como en los de evidencia delictiva. Así las cosas, no es dable rechazar la incoación del procedimiento inmediato, pues basta que el imputado esté presente y que se le haya dado la posibilidad de que ejerza su defensa material, que se le emplace para que responda a los cargos y que aporte lo que corresponda a su defensa material. La esencia de esta posibilidad procesal no está en la actitud del imputado frente a los cargos -de ser así solo sería viable en el supuesto de la confesión-, sino en la entidad de los elementos de convicción que rodean al caso y que hacen viable estimar que existen datos patentes del hecho delictivo y de su autor.

Este supuesto hace alusión a la existencia de suficiencia probatoria. Así pues, existen elementos de convicción suficientes, cuando de lo actuado en la investigación preliminar se han hallado elementos incriminatorios de calidad tal, que bastan para sustentar una acusación; incluso cabe la posibilidad que en los casos de flagrancia legal donde ésta no resulta muy clara, se invoque esta causal y no la de flagrancia legal para la incoación del proceso inmediato. Finalmente es imperioso dejar presente, que el extremo

“Elementos de convicción suficientes” no puede estar ausente en los otros dos presupuestos, toda vez que una flagrancia por sí sola, sin mayores actos de investigación o recojo de evidencias, e incluso una confesión, sin elementos de convicción que lo corroboren, relevan de la obligatoriedad de la incoación de un proceso inmediato, por tanto no le sería exigible al Fiscal su incoación, cuando no cuenta con este elemento trascendental para lograr una eventual victoria en juicio²⁷.

“2. Quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342, sean necesarios ulteriores actos de investigación”²⁸.

Al respecto podemos considerarla como una excepción a la aplicación del Proceso Inmediato, pues: **1. Cuando se trata de casos complejos:** Esta excepción la encontramos taxativamente en la norma procesal, conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 446 del NCPP, por el que el proceso inmediato, en los 5 casos enunciados como presupuestos materiales, no aplica para casos complejos, entendido éste bajo los términos establecidos en el numeral 3 del artículo 342 del NCPP, esto es cuando la investigación: **a. Requiera de la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación;** cuando por ejemplo para esclarecer el hecho delictivo se requiera tomar diversas testimoniales, efectuar peritajes, recoger evidencias, realizar diligencias de reconocimiento, levantamiento del secreto bancario o de telecomunicaciones, inspecciones, etc., entendiendo el término “significativo”, como “abundante”, más de lo usual. **b. Comprenda la investigación de numerosos delitos;** es decir que al procesado no sólo se va a investigar por el delito A, sino que también se encuentra implicado en

²⁷ Zelada, R. (2016) “*El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 64-65.

²⁸ Decreto legislativo 1194 del 29 de agosto de 2015. Artículo 446°.

el delito B ó C, por tanto es necesario desplegar una mayor actividad investigatoria. **c. Involucra una cantidad importante de imputados o agraviados;** en este extremo cabe precisar que si bien es cierto la pluralidad de imputados (en cantidad importante) justifica la declaratoria de complejidad de un proceso, en el caso del proceso inmediato, ello no será obstáculo si todos ellos están implicados en el mismo delito – debiendo entenderse hecho, de lo contrario nos encontraríamos frente a un caso de complejidad –, constituyendo esta circunstancia una excepción de la excepción. Por ejemplo se interviene a 3 personas que estaban robando su cartera a una señorita, al estar todos ellos vinculados al hecho, no habría inconveniente en aplicar el proceso inmediato por flagrancia. **d. Demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos;** En efecto puede darse el caso en los que es necesaria la prueba de ADN en la que si bien se han tomado las muestras, las mismas no son analizadas por falta de presupuesto o se tratan de pericias antropométricas que además de existir cierto grado de dificultad y especialidad en el perito, requieren de información particular para el cotejo. **e. Necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país;** en efecto sobre todo cuando se trata de delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas, muchas veces se requiere información que se debe recabar de otros países, en las que incluso el idioma no es el español, lo que va implicar mayor desgaste de tiempo en las traducciones respectivas. **f. Involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales;** va darse ser necesaria la realización de diligencias en distritos judiciales diferentes al que viene conociendo el proceso, en consecuencia va ser necesaria muchas veces que dichas diligencias se lleven mediante exhorto, con la consecuente demora que ello genera. **g. Revisa la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado;** en efecto se conoce por ejemplo que en los casos de delitos contra la administración pública los peritos contables requieren revisar una serie de documentos que además de ser

abundantes, el acceso a las mismas es bastante difícil, ya sea porque han desaparecido por el transcurso del tiempo, o porque la autoridad en el poder se muestra poco colaboradora. **h. Comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma.** Sobre todo porque en estos casos es necesaria la realización de diversas diligencias para esclarecer los hechos, podemos citar como ejemplo el caso de la gran familia, de la que como sabemos se trata de una banda liderada por el conocido como “Viejo Paco” que ejercía dominio en toda la zona norte del Perú (Trujillo, Chiclayo, Piura), estando implicado en casos, de extorsiones, homicidio por sicariato, robos, etc., esta persona viene siendo juzgada por uno de los Juzgados Penales Supra Nacionales ubicado en la ciudad de Lima, sin embargo las diligencias de investigación se deben realizar en diversos distritos judiciales que comprenden las ciudades antes citadas. En tal sentido, si bien el representante del Ministerio Público en los supuestos de **flagrancia, confesión y suficientes elementos de convicción previo interrogatorio del imputado**, está en la obligación de incoar el proceso inmediato, dicha obligatoriedad se relativiza cuando en esas investigaciones se configure un supuesto de complejidad regulado en el numeral 3 del artículo 342 del NCPP, por lo que en esos casos deberá conducir el proceso a través del proceso común, o de algún otro que a su criterio aplique (colaboración eficaz, proceso de seguridad, etc.). Cabe recordar también que esta excepcionalidad no aplica en los supuestos de omisión de asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad²⁹.

“3. Si se trata de una causa seguida contra varios imputados, sólo es posible el proceso inmediato si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén

²⁹ Zelada, R. (2016) “*El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 69-72.

implicados en el mismo delito. Los delitos conexos en los que estén involucrados otros imputados no se acumulan, salvo que ello perjudique al debido esclarecimiento de los hechos o la acumulación resulte indispensable³⁰.

Los puntos antes desarrollados rigen claramente para los procesos simples. Empero, tratándose de un procedimiento con pluralidad de imputados se requiere, conforme al artículo 446.1 del NCPP, que todos ellos se encuentren en una de las situaciones previstas anteriormente: flagrancia común, confesión o evidencia delictiva; todos los encausados pueden estar incurso en uno de los tres supuestos o, indistintamente, en alguno de ellos. Además se exige que los encausados estén implicados en el mismo delito o, con mayor amplitud, hecho punible: unidad procesal del hecho. Esta permisión tiene la misma justificación del propio proceso inmediato: está reservado para ser aplicado a hechos delictivos de índole sencilla y de fácil solución, por lo que no sería funcional aplicarlos a causas con pluralidad de imputados en diversa situación jurídica y de cierta complejidad.

“4. Independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el Fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente Código”³¹.

Se trata de procesos que el legislador ha decidido – entendemos que por su sencillez y la abundante carga procesal que ellos representan –, que deben ser tramitados como proceso inmediato, es decir estos procesos si o sí, deben nacer como proceso inmediato, no admite

³⁰ Decreto legislativo 1194 del 29 de agosto de 2015. Artículo 446°.

³¹ Decreto legislativo 1194 del 29 de agosto de 2015. Artículo 446°.

posibilidad que se tramiten como proceso común, dicho de otro modo, por voluntad legislativa, a partir de la dación de esta ley, van a tener en su ADN el proceso inmediato³².

a. Omisión de asistencia familiar.- Esta es una de las innovaciones que se ha dado con la modificatoria del artículo en análisis, por imperio de la cual en adelante una vez que el representante del Ministerio Público tome conocimiento, que un ciudadano o ciudadana, pese a haber sido requerido por el Juez, del pago de pensiones de alimentos devengadas, y que pese a ello no ha cumplido con honrar la deuda alimentaria, en su momento, deberá canalizar el procesamiento de este tipo de delito, obligatoriamente por la vía del proceso inmediato.

b. Conducción en estado de ebriedad.- De igual forma es otra de las innovaciones que se ha dado con la modificatoria del artículo en análisis, por imperio de la cual en adelante los procesos por este tipo de delitos, van a tener que ser canalizados obligatoriamente por la vía del proceso inmediato.

El maestro San Martín Castro, expone que en estos delitos se excluye los presupuestos de flagrancia, confesión y evidencia delictiva (artículo 446.4 del NCPP). En pureza, desde la propia configuración de tales delitos – salvo el caso del artículo 150 del CP -, se tiene que se trata de ilícitos penales, el primero, de evidencia delictiva – por la resolución judicial proveniente del proceso civil de alimentos, que es un elemento del tipo objetivo -; y, el segundo de flagrancia, pues la acreditación de la drogadicción o de la ebriedad consta en la pericia de alcoholemia (dosaje etílico) o toxicológica correspondiente, realizada inmediatamente luego de la intervención del imputado – cuya valorabilidad, incluso a los efectos de asumir la existencia de

³² Zelada, R. (2016) “*El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación*”. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 64-65.

proceso inmediato, debe reconocer su absoluta legalidad. Tal connotación acreditativa permite entender, como configuración implícita, que en su constancia fluyen las notas de evidencia delictiva o de flagrancia. Por consiguiente, en atención a las bases que lo informan, si no se presentan estas circunstancias en el requerimiento de proceso inmediato, el juez de la investigación preparatoria no puede aceptar la incoación de dicho proceso especial³³.

“Artículo 447.- Audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva.

- 1. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el Fiscal debe solicitar al Juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El Juez, dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes al requerimiento fiscal, realiza una audiencia única de incoación para determinar la procedencia del proceso inmediato. La detención del imputado se mantiene hasta la realización de la audiencia.***
- 2. Dentro del mismo requerimiento de incoación, el Fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva, que asegure la presencia del imputado en el desarrollo de todo el proceso inmediato. El requerimiento de incoación debe contener, en lo que resulte pertinente, los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 336.***
- 3. En la referida audiencia, las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda.***
- 4. La audiencia única de incoación del proceso inmediato es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. El Juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso***

³³ San Martín, C. (2016) “Derecho Procesal Penal. El Proceso Inmediato (NCPP originario y D. Leg No. 1194)”. Lima: Gaceta Penal No. 79. Enero 2016. Lima – Perú. Pág. 161-162.

inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso:

- a) Sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato.*
- b) Sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes;*
- c) Sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal;*

5. El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma audiencia de incoación.

La resolución es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpone y fundamenta en el mismo acto. No es necesario su formalización por escrito. El procedimiento que se seguirá será el previsto en el inciso 2 del artículo 278.

6. Pronunciada la decisión que dispone la incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, en el día, lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448.

7. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el Fiscal dicta la Disposición que corresponda o la formalización de la Investigación Preparatoria.

Para los supuestos comprendidos en los literales b) y c), numeral 1 del artículo 446, rige el procedimiento antes descrito en lo que corresponda. Solo en estos supuestos, el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los treinta (30) días de formalizada la Investigación Preparatoria”³⁴.

³⁴ Decreto legislativo 1307 del 29 de diciembre de 2016. Artículo 447°.

Planteado el requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, es al término del plazo de detención policial de oficio o de la preliminar – hasta 24 horas en delitos comunes y hasta 15 días en delitos exceptuados – salvo los supuestos de confesión y de evidencia delictiva, en que la oportunidad procesal para presentar el requerimiento se extiende al término de las diligencias preliminares y hasta antes de los 30 días de iniciada la investigación preparatoria formalizada, el juez de la investigación preparatoria debe señalar la denominada “audiencia única de incoación del proceso inmediato” dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal. El plazo de la detención de esta manera, se extiende automáticamente hasta la realización de la audiencia, prolongación que no puede reputarse inconstitucional porque el reo ya fue puesto a disposición judicial y desde esa perspectiva el juez debe tener, y tiene un plazo razonable, por lo demás, muy breve, para decidir su situación jurídica.

El requerimiento de incoación del proceso inmediato hace las veces, en casos de flagrancia de la disposición fiscal de la formalización de la investigación preparatoria – por tal razón está sujeto a los mismos presupuestos formales que fija el artículo 336.2 del NCPP. Por consiguiente, si se cumplen los presupuestos materiales del artículo 268 del NCPP, el fiscal deberá solicitar la prisión preventiva y, acumulativamente, otra medida de coerción personal o real contra el imputado. Cabe preguntarse si el fiscal no pide la prisión preventiva, situación que importa asumir que no se dan los presupuestos materiales que la justifican, ¿la situación de detención seguirá estable?. Una primera respuesta, en aras de la eficacia del procedimiento, será afirmativa, pues se requiere cumplir con los plazos reducidos que prevé. Otra respuesta, proclamando la superioridad del derecho a la libertad y del valor justicia material, así como del principio de proporcionalidad, será optar por la inmediata libertad del detenido. Es de inclinarse por esta segunda opción, que está en consonancia con los valores claves del Estado Constitucional.

Audiencias y defensores públicos. “El Decreto Legislativo No. 1194 del 30 de agosto de 2015 ya regulaba el carácter inaplazable de las audiencias (audiencia única de incoación de proceso inmediato y audiencia única de juicio inmediato). Ahora el Decreto Legislativo 1307 modifica el artículo 85.1 del Código Procesal Penal, estableciendo que son inaplazables las audiencias de los artículos 447 y 448, y su quinta disposición Complementaria final manda a que el Ministerio de Justicia, en un plazo no mayor de 60 días, reglamente el trámite para la participación del defensor público en las audiencias inaplazables. Una de las principales causas de la frustración de audiencias es la incomparecencia de los abogados defensores; por ello, es un avance que se dote de mayor eficacia a este proceso, asegurando la participación de los defensores públicos en las audiencias inaplazables. Sin embargo, tal medida debe ir acompañada de la voluntad política de incrementar el número de defensores públicos que, en no pocos distritos judiciales, resultan insuficientes para atender la carga procesal.

El artículo 85.1 del NCPP prescribe que el abogado defensor incompareciente a una audiencia inaplazable “sea reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por un defensor público, llevándose adelante la diligencia.

La realidad demuestra que, en no pocos casos, se presentan factores que no hacen posible que ello ocurra, situación que se agrava en lugares de la zona andina y la Selva, donde las posibilidades de contar “en ese acto” con un defensor privado, se reduce ostensiblemente, quedando el defensor público como única opción, incluso, en algunas oportunidades ni siquiera esta opción se cuenta.

Por ende, en un escenario en que se ponga en riesgo el ejercicio del derecho a la defensa, el Juez deberá garantizar el otorgamiento de un plazo razonable para que el nuevo defensor (privado o público) pueda

definir la mejor estrategia o defensa del imputado caso contrario, el ejercicio de tal derecho se tornará en ineficaz”³⁵.

Orden en el pronunciamiento judicial. “El artículo 447.4 del NCPP, en su texto primigenio establecía que el juez, frente a un requerimiento de incoación del proceso inmediato, se pronunciará en el siguiente orden: i) por la medida coercitiva; ii) por las manifestaciones de justicia negociada (principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y terminación anticipada), iii) por el proceso inmediato. Pese a lo anterior, en el Protocolo de actuación interinstitucional para el Proceso Inmediato se estableció un orden inverso, es decir, en primer lugar el Juez debía pronunciarse por el proceso inmediato, y en último lugar por la medida coercitiva. En la práctica se impuso el orden indicado en el Protocolo. Meses después el acuerdo plenario 2-2016(CIJ-116 de fecha 01 de junio de 2016, en su fundamento jurídico 23 afirmó que: “si la ley fija un orden para resolver los puntos planteados es inexcusable que ese orden tiene que respetarse..” con el Decreto Legislativo 1307, se retorna a la práctica desarrollada en el protocolo, pues, el artículo 474.4 del CPP establece ahora que el debate y resolución se desarrollará en el siguiente orden: a) sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato, b) sobre la procedencia del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, solicitado por las partes; y c) sobre la procedencia de la medida coercitiva requerida por el Fiscal. Considera positiva esta modificación, porque el orden fijado por el Decreto Legislativo 1194 generaba distorsiones cuando, dictado en primer orden un mandato de prisión preventiva, el plazo establecido resultaba incongruente con un proceso común, derivado de la improcedencia del proceso inmediato. En el acuerdo plenario 2-2016 se sostuvo que “el plazo de la privación procesal de la libertad no está en función a si la causa puede resolverse a través del procedimiento inmediato”, sin embargo, dicha tesis resulta difícil de admitir, porque sobre la base de la

³⁵ Guillermo, J. (2017). “*La Reforma del Proceso Inmediato en el D. Leg. No. 1307*”. Lima: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano No. 629. Febrero 2017. Lima – Perú. Pág. 4-5.

necesidad de sujeción del imputado al proceso, no es lo mismo establecer un plazo de prisión preventiva en un proceso inmediato (caracterizado por su brevedad debido a la simplificación de etapas procesales), que en un proceso común (que se distingue por ser lato en razón del desarrollo de las etapas procesales en toda su extensión). En el derecho comparado podemos citar el artículo 430 del CPP de Costa Rica, el cual establece que el plazo de la prisión preventiva en el procedimiento expedito para delitos de flagrancia no debe sobrepasar los 15 días hábiles, norma que evidencia que el legislador costarricense consideró necesario establecer un plazo especial de prisión preventiva, de acuerdo con la naturaleza célere de este proceso”³⁶.

En cumplimiento del principio de aceleramiento procesal, la audiencia única es inaplazable. De conformidad con el artículo 85 del NCPP, si el defensor no concurre será reemplazado con uno que en ese acto designe el imputado o, en su defecto, por uno de oficio. Se entiende que si el imputado está privado de libertad, su concurrencia a la audiencia es inevitable. Igual será la opción si el imputado decide guardar silencio o, en todo caso, no concurre adoptando una posición rebelde ante el emplazamiento judicial. La audiencia irremediamente se lleva a cabo con la sola concurrencia del defensor. La pauta normativa implícita es lo inaplazable de la audiencia y el aseguramiento del derecho de defensa con el concurso obligatorio de un defensor, de confianza o público. Lo que si será imposible si el imputado no concurre dolosamente, es la continuación del procedimiento, en el periodo de enjuiciamiento.

El apartado 6 del artículo 447 del NCPP, al hacer mención a un efecto disciplinario en caso de incumplimiento del plazo, lo define como un plazo impropio, es decir, su vulneración no acarrea la caducidad para formular acusación y, por ende, no autoriza el archivo de la causa por la supuesta presencia sobrevenida de un impedimento procesal.

³⁶ Guillermo, J. (2017). “*La Reforma del Proceso Inmediato en el D. Leg. No. 1307*”. Lima: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano No. 629. Febrero 2017. Lima – Perú. Pág. 4-5.

Recibida la acusación fiscal, el juez de la investigación preparatoria remitirá lo actuado al juez penal competente – según la entidad del delito, al juzgado penal unipersonal o colegiado (artículo 28 apartados 1 y 2 del NCPP) –. Se entiende que lo que el fiscal enviará será no solo el requerimiento acusatorio, sino también el expediente fiscal respectivo – este lo acompaña incluso cuando pide la incoación del proceso inmediato (artículo 447.2 del NCPP). En caso de rechazo del procedimiento inmediato, el fiscal deberá dar trámite a la investigación conforme al proceso común, respectivo. A estos efectos dictará la disposición que corresponda o la de formalización de la investigación preparatoria³⁷.

“Artículo 448.-

- 1. Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, El Juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las setenta y dos (72) horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional.***
- 2. La audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la Audiencia.***
- 3. Instalada la Audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objeto de la acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 349. Si el Juez Penal determina que los defectos formales de la acusación requieren un nuevo análisis, dispone su subsanación en la misma audiencia. Acto seguido, las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones previstas en el artículo 350, en lo que corresponda.***

³⁷ San Martín, C. (2016) “Derecho Procesal Penal. El Proceso Inmediato (NCPP originario y D. Leg No. 1194)”. Lima: Gaceta Penal No. 79. Enero 2016. Lima – Perú. Pág. 162-163.

- 4. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa, es apelable con efecto devolutivo, el recurso se interpondrá y fundamentará en el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410.**
- 5. El Juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias. Cumplidos los requisitos de validez de la acusación, de conformidad con el numeral 1 del artículo 350; y resueltas las cuestiones planteadas, el Juez Penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio, de manera inmediata y oral.**
- 6. El juicio se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El Juez Penal que instale el juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. En lo no previsto en esta Sección, se aplican las reglas del proceso común, en tanto sean compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato”³⁸.**

La realización del enjuiciamiento inmediato tiene, en puridad, dos periodos definidos, pero sin solución de continuidad, que deben realizarse, inmediata y oralmente, de ahí el acento en la denominación de la audiencia “única”. El primer periodo está destinado a que el Juez penal pueda sanear el proceso y dictar sucesivamente, sin suspensión alguna, los autos de enjuiciamiento y de citación a juicio. El segundo periodo está circunscripto al juicio propiamente dicho, informado siempre por el principio de aceleramiento procesal, que es el límite de aplicación supletoria de las reglas del proceso común (frase final del apartado 4 del artículo 448 del NCPP).

Recibido el expediente fiscal con la acusación fiscal, el juez penal señalará día y hora para la audiencia única, plazo que no debe exceder de las 72 horas – plazos tan cortos son peligrosos – pues su cumplimiento está sujeto al calendario de audiencias de los órganos

³⁸ Decreto legislativo 1307 del 29 de diciembre de 2016. Artículo 448°.

jurisdiccionales, siendo de recordar que un presupuesto de la eficacia de la oralidad es que existan el número suficiente de jueces para acometer con prontitud las tareas de juzgamiento.

Actividad probatoria. "Uno de los ataques más fuertes contra el Proceso Inmediato es la afectación del derecho de prueba, En efecto, una de las normas del juicio inmediato establecía que: "las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia, bajo apercibimiento de prescindirse de ellos" (artículo 448.2 del CPP). Tanto el imputado como el Ministerio Público enfrentaban serias dificultades para hacer comparecer a sus órganos de prueba a la audiencia única del juicio inmediato, por ello el Acuerdo Plenario 2-2016 en su fundamento jurídico 12 fue claro al señalar que "los apercibimientos ante la incomparecencia de órganos de prueba 8...) y su ejecución corresponden al órgano jurisdiccional, porque es quien tiene el ius imperium, las partes no pueden conducir coactivamente a los testigos y peritos. Si se acredita documentalmente que la parte concernida realizó adecuadamente la debida citación de los órganos de prueba, corresponde al juez, de ser el caso, insistir en su comparecencia...". El artículo 448.2 del CPP modificado por el Decreto Legislativo No. 1307, y si bien mantiene como carga de las partes, la de preparar, convocar y garantizar la presencia de sus órganos de prueba en la audiencia, acertadamente ha eliminado el apercibimiento de "prescindirse de ellos". Por tanto, frente a la incomparecencia de testigos y peritos, el Juez debe disponer su conducción compulsiva, y agotada esta posibilidad, recién puede decretar su prescindencia, en aplicación del artículo 379.1 y 2 del CPP. No está demás señalar que decretada la prescindencia será posible evaluar la posibilidad de proceder a la lectura de actuaciones previas (informes o dictámenes periciales, actas de examen y debate pericial, declaraciones de testigos prestadas ante el fiscal), siempre y cuando se

hayan practicado “con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes”, conforme al artículo 383.1 literales c) y d) del CPP”³⁹.

Una vez cumplido el trámite de contradicción, esto es, de planteamiento y debate de las mociones de las partes – planteamiento de pruebas, objeciones a la reparación civil, exclusiones probatorias, deducción de excepciones, cuestiones previas (artículo 7.2 del NCPP), cuestiones de competencia y otras-, el juez penal debe resolverlas mediante resolución oral y, en su consecuencia, siempre oralmente, emitir los autos de enjuiciamiento y de citación a juicio.

El segundo periodo, y final del proceso inmediato, es propiamente el juicio inmediato. El auto de citación a juicio señalará, obligatoriamente, en la misma fecha y hora, la realización del acto oral. Lo inmediato se entiende como la necesidad que el juicio oral se lleve a cabo en ese mismo acto, no en fecha posterior, así sea para el día siguiente, salvo claro está que por la hora sea imposible continuar con la “audiencia única”.

Se entiende que la tendencia de este proceso estriba en que la audiencia se realice en la misma sesión – la simplicidad del asunto así lo ameritaría -. El receso de la sesión, en todo caso, por razones de tiempo o prolongación del debate, determinará que ésta se reanude indefectiblemente al día siguiente o, a más tardar, al subsiguiente (artículo 360.1 del NCPP) - ¿su vulneración implica la nulidad de lo actuado? No será así desde luego, sino se produce efectiva indefensión material o no se vulneren los derechos del garantizado-. Las sesiones, en este último caso, serán continuas e ininterrumpidas y, entre sesión y sesión, sin excepciones, no se podrá abrir otro juicio oral – en el proceso

³⁹ Guillermo, J. (2017). “*La Reforma del Proceso Inmediato en el D. Leg. No. 1307*”. Lima: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano No. 629. Febrero 2017. Lima – Perú. Pág. 4-5.

común se permiten excepciones aunque con una perspectiva restrictiva: artículo 360.5 del NCPP.

Trámite de apelación. “El Proceso inmediato desde su incorporación en el CPP no contó con reglas especiales en materia impugnatoria. La modificación efectuada por el Decreto Legislativo No. 1194 tampoco trajo consigo mayor avance en este aspecto, salvo lo previsto en el artículo 447.5 del CPP, que estableció que “el auto que resuelve el requerimiento del proceso inmediato debe ser pronunciado, de modo impostergable, en la misma audiencia de incoación. La resolución es apelable con efecto devolutivo”. La omisión legislativa en esta materia llevó a sostener en el acuerdo plenario 2-2016/CIJ-116 que la “sección primera del Libro Quinto del NCPP no fijó un procedimiento específico acelerado, de apelación. En consecuencia rige el conjunto de las normas generales sobre la materia que tiene establecidas en el Libro cuarto del NCPP. En el caso de la apelación del auto de la prisión preventiva señaló que rige el artículo 278.1 del CPP, siendo el plazo de apelación de 3 días, abriendo la posibilidad de que esta apelación se presente ante el juez de juzgamiento; si la causa ya se encontrare en ese estado, será el juez que resulta competente para pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso (F. 24)”⁴⁰.

Apelación de sentencias. “En este extremo se han modificado los artículos 401.4, 414.1c, y 425.1 del CPP, estableciéndose las siguientes reglas: 1) el recurso se interpondrá en el mismo acto de lectura, sin que sea necesario su formalización por escrito, 2) en caso el acusado no concurra a la audiencia de lectura, rige el literal c del artículo 414.1 del CPP, esto es, tiene un plazo de tres días para interponer recurso de apelación; 3) el plazo para dictar sentencia, no podrá exceder de tres días, bajo responsabilidad”. Aquí se supera la inicial omisión legislativa,

⁴⁰ Guillermo, J. (2017). “*La Reforma del Proceso Inmediato en el D. Leg. No. 1307*”. Lima: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano No. 629. Febrero 2017. Lima – Perú. Pág. 4-5.

aún cuando el acortamiento de los plazos en segunda instancia (interposición de la apelación y emisión de la sentencia), no necesariamente favorecen el ejercicio del derecho al recurso y el adecuado análisis que corresponden a los jueces de apelación, por mas que se afirme que se tratan de “casos simples”⁴¹.

Los autos. El Decreto Legislativo 1307 precisa, dentro de sus reglas especiales, que son impugnables 1) el auto que resuelve la incoación del proceso inmediato, y 2) el auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa (audiencia de juicio inmediato). El momento de interposición y fundamentación del recurso se produce “en el mismo acto”, en ambos casos; sin embargo, si existe una diferenciación en el trámite por seguir, pues, en el caso del primero, rige el trámite de la apelación de la prisión preventiva (artículo 278) en tanto que en el caso del segundo se sigue el trámite de la impugnación diferida (artículo 410). Considero que debió aprovecharse esta oportunidad para establecer, también como regla especial, que en el caso de los autos que resuelven las medidas coercitivas, la interposición y fundamentación del recurso se efectúe en “el mismo acto”⁴².

⁴¹ Guillermo, J. (2017). “*La Reforma del Proceso Inmediato en el D. Leg. No. 1307*”. Lima: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano No. 629. Febrero 2017. Lima – Perú. Pág. 4-5.

⁴² Guillermo, J. (2017). “*La Reforma del Proceso Inmediato en el D. Leg. No. 1307*”. Lima: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano No. 629. Febrero 2017. Lima – Perú. Pág. 4-5.

CAPITULO IV

EL PROCESO INMEDIATO EN EL DERECHO COMPARADO

En la legislación comparada, conocidos son el “procedimiento acelerado” – Alemania, “enjuiciamiento rápido” – España, “procedimiento simplificado” – Francia, “giudizio direttissimo (juicio directo) y giudizio immediato (juicio inmediato)” – Italia, “proceso sumarísimo” – Portugal, “procedimiento simplificado” – Chile y Ecuador, “procedimiento extraordinario” – Uruguay.

- 1. Italia:** En la regulación italiana se establece el Giudizio Immediato contenido en los artículos 453 a 458 de su Código Procesal Penal y actualmente contempla cuatro supuestos de procedencia: ***A solicitud del Ministerio Público (Ordinario) artículo 453 inciso 1; A solicitud del Ministerio Público (Custodiale “prisión preventiva”) artículo 453 inciso 1; A solicitud del imputado artículo 453 inciso 3; A solicitud del imputado con la oposición al Decreto de Condena Penal artículo 461 inciso 3.*** Esta clase de proceso guarda relación con el supuesto de flagrancia con presencia de diligencia preliminar e investigación preparatoria.

El Giudizio Direttissimo que plantea la legislación italiana, está previsto para los casos de flagrancia (inc. 1 del artículo 449 del ordenamiento procesal de Italia) y confesión del investigado (inc. 5 del artículo 449 del mencionado cuerpo legal), cuando el representante del Ministerio Público lo considere necesario. “1.- *Quando una persona e stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di over procedere, puó presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento*”. “5.- *Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nel confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione*”. En este caso por decisión propia, el acusador acude directamente al juzgador en el plazo de cuarenta y ocho horas; esta clase de proceso guarda relación con el proceso de flagrancia

sin presencia de investigación preparatoria formal ni etapa intermedia contenido en el cuerpo procesal penal peruano⁴³.

2. **Costa Rica:** Se establece un proceso especial para el caso de delitos flagrantes, según la modificatoria que se realizó a su ordenamiento procesal penal el 4 de marzo de 2009, y cuyo artículo 422 establece que: *“Este procedimiento especial, de carácter expedito, se aplicará en los casos en los cuales se trate de delitos en flagrancia e iniciará desde el primer momento en que se tenga noticia de la comisión de un hecho delictivo de tal especie. En casos excepcionales, aun cuando se trate de un delito flagrante, se aplicará el procedimiento ordinario, cuando la investigación del hecho impida aplicar aquel. Este procedimiento especial omitirá la etapa intermedia del proceso penal ordinario y será totalmente oral”*. La regulación costarricense, faculta al fiscal el solicitar la aplicación del proceso expedito de flagrancia en el artículo 426 de la mencionada norma: *“Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud; el tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia”*.

El maestro Alfredo Araya Vega, refiere que en el caso costarricense, del 1 de octubre al 22 de abril de 2008, solamente para San José – capital – tuvo vigencia el plan piloto para delitos en flagrancia – seis meses en total -, donde se dio una respuesta concatenada a los conflictos penales, primero una fiscalía especializada que atendiera los asuntos en flagrancia delictiva y los resolviera de forma inmediata; de seguido, jueces de etapa intermedia y juicio abocados de forma exclusiva para dichas delincuencias. El resultado, se pasó de durar treinta y seis meses a un mes entre el momento del hecho y la sentencia.

⁴³ Salas, J. (2016) *“El Proceso Inmediato”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Frangenti. Año 1. No. 2. Agosto 2016. Lima – Perú. Pág. 26-27.

A partir del 23 de abril de 2009 entró en vigencia el proceso expedito para delitos en flagrancia como un proceso especial. Sus principales características son: una duración de 15 días hábiles, completamente oral –cero papel –, suprime la etapa intermedia, fiscales y jueces especializados, atienden solamente delitos en flagrancia delictiva (clásica, cuasiflagrancia y presunta). El éxito se ha logrado. Una justicia cercana al conflicto, bajo estándares de justicia de calidad, eficiente y eficaz. Una confianza ciudadana en la administración de justicia.

3. **España:** El ordenamiento español también considera la aplicación de un proceso célere para casos cuya pena privativa de libertad no exceda los 5 años, sancionados con otras penas y en determinados delitos, de acuerdo al artículo 795, de su regulación penal y que se trate de delitos flagrantes; se denomina enjuiciamiento rápido. Los delitos en los que será de más aplicación este procedimiento son: Lesiones (Artículo 147, prisión de 6 meses a 3 años). Coacciones (Artículo 172, prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses. Amenazas (Inc. 1 del artículo 169, prisión de 1 a 5 años). Violencia física o psíquica habitual en el ámbito familiar o casos de violencia de género. Hurto (Artículo 235, prisión de 1 a 3 años, agravado). Robo (Artículo 241, prisión de 2 a 5 años cuando en su forma agravada). Hurto y robo de uso de vehículos (Artículo 244, 2 a 5 años en su forma agravada por el uso de violencia). Delitos contra la seguridad del tráfico (conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes, conducir sin permiso de conducción o habiendo perdido todos los puntos del carnet, negarse a realizar la prueba de alcoholemia, conducir superando determinados límites de velocidad finados en el Código penal). Delitos contra la salud pública que causen grave daño a la salud (por ejemplo tráfico de la sustancia estupefaciente hachís). Delito de daños. Algunos tipos de delitos contra la propiedad intelectual o industrial. Atentado (pegar a un policía, a un Médico/a o Enfermero/a, que trabaje en los servicios públicos de salud, ó a un Profesor/a que desempeñe su trabajo en un colegio o instituto de enseñanza pública o a cualquier otro funcionario público o que desempeña funciones equiparables) Cabe resaltar que este

proceso rápido está destinado a la tramitación de delitos menos graves, en los que la sanción no exceda los 5 años de pena privativa de libertad y que sean flagrantes, de instrucción sencilla y fácil.

4. **Chile:** Procedimiento especial para simples delitos El ordenamiento penal chileno prevé un procedimiento especial para los denominados delitos simples en el segundo párrafo del artículo 388 de su Código Procesal Penal, al establecer que: *“El procedimiento se aplicará, además, respecto de los hechos constitutivos de simple delito para los cuales el ministerio público requiriere la imposición de una pena que no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo”*. Entendiéndose como simple delito, según lo establecido por su ordenamiento penal sustantivo: *“Artículo 3°. Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, simples delitos y faltas y se califican de tales según la pena que les está asignada en la escala general del artículo 21”*. El artículo 21 del Código Penal chileno establece como simple delito aquel que contenga las penas de presidio menor, reclusión menor, confinamiento menor, extrañamiento menor, delegación menor, destierro, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, inhabilitación especial temporal para emitir licencias médicas, suspensión de cargo u oficio público o profesión titular, inhabilitación perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal, suspensión para conducir vehículos a tracción mecánica o animal. Las penas menores están previstas para los simples delitos, diferenciándose el presidio de la reclusión y prisión en que según lo establece su artículo 32 el primero está sujeto a la realización de trabajos establecidos mediante reglamento. Según el artículo 56 del Código Penal de Chile las penas de presidio o reclusión en su grado mínimo tienen un plazo de 61 días a 240 días, esto es de 2 a 8 meses aproximadamente, mientras que la prisión en su grado mínimo tiene una pena de 1 a 20 días, siendo únicamente a las penas solicitadas que no excedan estos marcos los casos en que se podrá aplicar el proceso simplificado.

Procedimiento simplificado en caso de falta o simple delito flagrante. El ordenamiento chileno también contempla este proceso para los casos de delitos simples flagrantes en el artículo 393 bis, dándole la facultad discrecional al fiscal de poner al imputado a disposición del juez de garantía para efectos de la audiencia de control de detención.

Tratándose de una persona sorprendida in fraganti cometiendo una falta o un simple delito de aquellos a que da lugar este procedimiento, el fiscal podrá disponer que el imputado sea puesto a disposición del juez de garantía” Según lo antes mencionado, para el ordenamiento procesal penal chileno el proceso simplificado solo puede realizarse en caso de faltas y los delitos simples y con mayor razón si estos son flagrantes, siendo aún más selectivos en caso de los delitos simples a que se cumpla con la condición de que la pena que se solicite esté en el extremo mínimo previsto normativamente.

CAPITULO V

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

RESULTADOS

En este apartado el resultado de la cantidad de casos que se presentan en el Ministerio Público – Sede Jaén, en el año 2016.

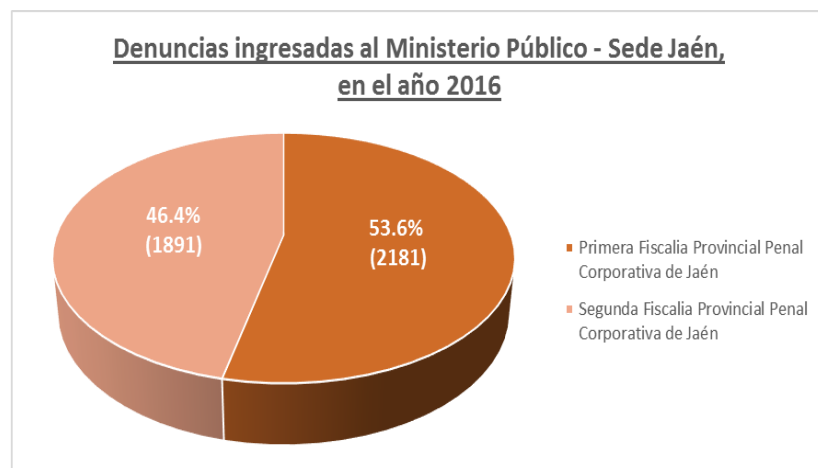
a) Denuncias ingresadas al Ministerio Público – Sede Jaén, en el año 2016.

Tabla N° 01: Denuncias ingresadas al Ministerio Público – Sede Jaén, en el año 2016.

FISCALIA	DENUNCIAS INGRESADAS	%
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén	2181	53.6%
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén	1891	46.4%
Total	4072	100%

Fuente: Investigación Propia.

FIGURA N° 01



DESCRIPCIÓN:

De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que durante el año 2016 en el Ministerio Público Sede Jaén-2016, ingresaron 2181 denuncias a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén y 1891 denuncias a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén, en total ingresaron 4072 denuncias.

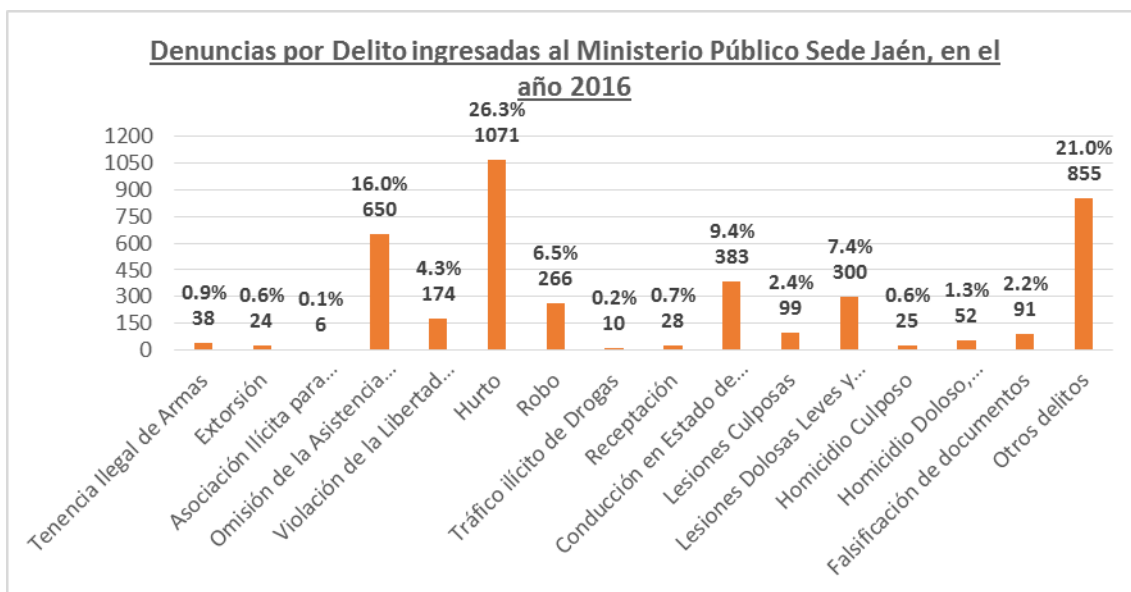
**b) Cantidad de denuncias por delitos ingresadas al Ministerio Público
– Sede Jaén, en el año 2016.**

Tabla N° 02: Cantidad de denuncias por delitos ingresadas al Ministerio Público – Sede Jaén, en el año 2016.

DELITO	DENUNCIAS	PORCENTAJE
Tenencia Ilegal de Armas	38	0.9%
Extorsión	24	0.6%
Asociación Ilícita para Delinquir	6	0.1%
Omisión de la Asistencia Familiar	650	16%
Violación de la Libertad Sexual	174	4.3%
Hurto	1071	26.3%
Robo	266	6.5%
Tráfico Ilícito de Drogas	10	0.2%
Receptación	28	0.7%
Conducción en Estado de Ebriedad	383	9.4%
Lesiones Culposas	99	2.4%
Lesiones Dolosas Leves y Graves	300	7.4%
Homicidio Culposo	25	0.6%
Homicidio Doloso, Femicidio y Sicariato	52	1.3%
Falsificación De Documentos	91	2.2%
Otros delitos	855	21%
Total	4072	100%

Fuente: Investigación Propia.

FIGURA No. 02



DESCRIPCIÓN:

De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que en el año 2016 se presentaron 38 denuncias por el delito de Tenencia Ilegal de Armas, 24 denuncias por el delito de Extorsión, 6 denuncias por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir, 650 denuncias por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, 174 denuncias por el delito de Violación de la Libertad Sexual, 1071 denuncias por el delito de Hurto, 266 denuncias por el delito de Robo, 10 denuncias por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, 28 denuncias por el delito de Receptación, 383 denuncias por el delito de Conducción en Estado de Ebriedad, 99 denuncias por el delito de Lesiones Culposas, 300 denuncias por el delito de Lesiones Dolosas Leves y Graves, 25 denuncias por el delito de Homicidio Culposo, 52 denuncias por los delitos de Homicidio Doloso, Feminicidio y Sicariato, 91 denuncias por el delito de Falsificación de Documentos y 855 por otros delitos.

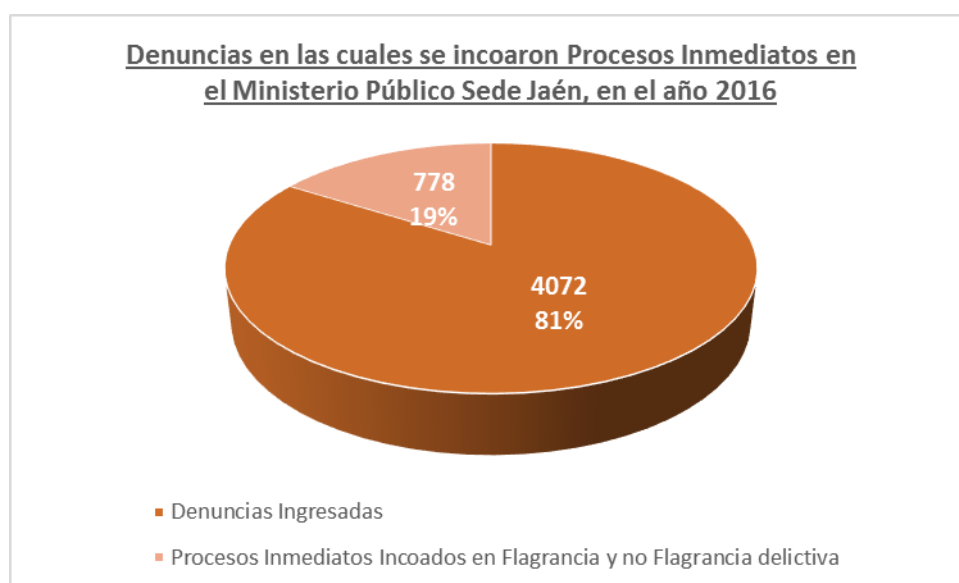
c) Cantidad de denuncias en las cuales se incoaron procesos inmediatos (tanto en flagrancia delictiva como en NO flagrancia delictiva) en la provincia de Jaén durante el año 2016:

Tabla N° 03: Cantidad de denuncias en las cuales se incoaron procesos inmediatos en el Ministerio Público – Sede Jaén, en el año 2016.

DENUNCIAS INGRESADAS 2016	PROCESOS INMEDIATOS INCOADOS EN FLAGRANCIA Y NO FLAGRANCIA DELICTIVA	%
4072	778	19%

Fuente: Investigación Propia.

FIGURA No. 03



DESCRIPCIÓN

Se puede advertir que de las 4072 denuncias ingresadas al Ministerio Público Sede Jaén, durante al año 2016 solo 778 denuncias fueron tramitadas a través de la Incoación de Proceso Inmediato (en Flagrancia Delictiva y No Flagrancia Delictiva) que equivale al 19% del total de denuncia ingresadas.

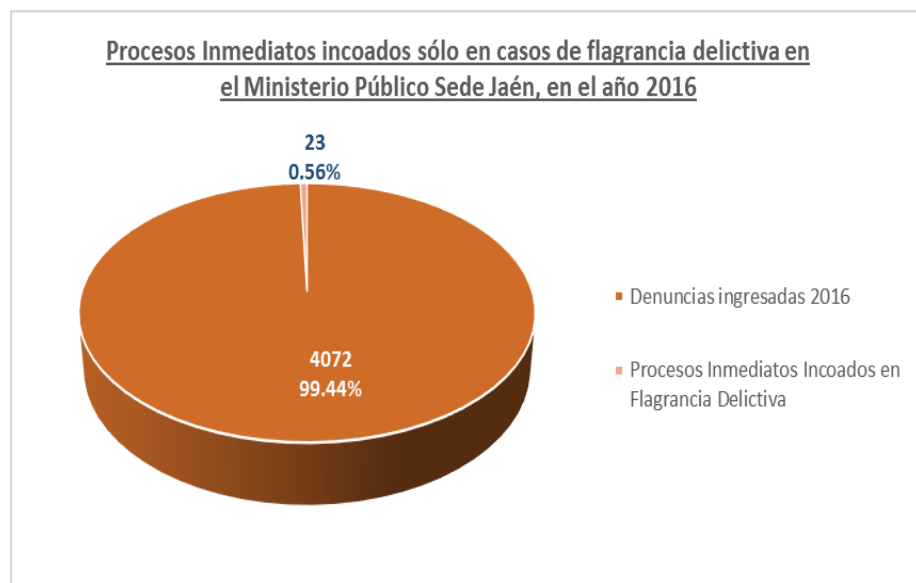
- d) Cantidad de denuncias en las cuales se incoaron Procesos Inmediatos SOLO en casos de flagrancia delictiva en la provincia de Jaén durante el año 2016:**

Tabla N° 04: Cantidad de denuncias en las cuales se incoaron procesos inmediatos solo en casos de Flagrancia Delictiva en el Ministerio Público – Sede Jaén, en el año 2016.

DENUNCIAS INGRESADAS 2016	PROCESOS INMEDIATOS INCOADOS EN FLAGRANCIA DELICTIVA		%
4072	23	Lesiones Dolosas Leves=1	0.56%
		Hurto= 19	
		Robo=1	
		Receptación=2	

Fuente: Investigación Propia.

FIGURA No. 04



DESCRIPCIÓN

Se puede colegir que de las 4072 denuncias que ingresaron al Ministerio Público durante el año 2016 solamente en el 0.56% se ha solicitado Proceso Inmediato en Flagrancia Delictiva.

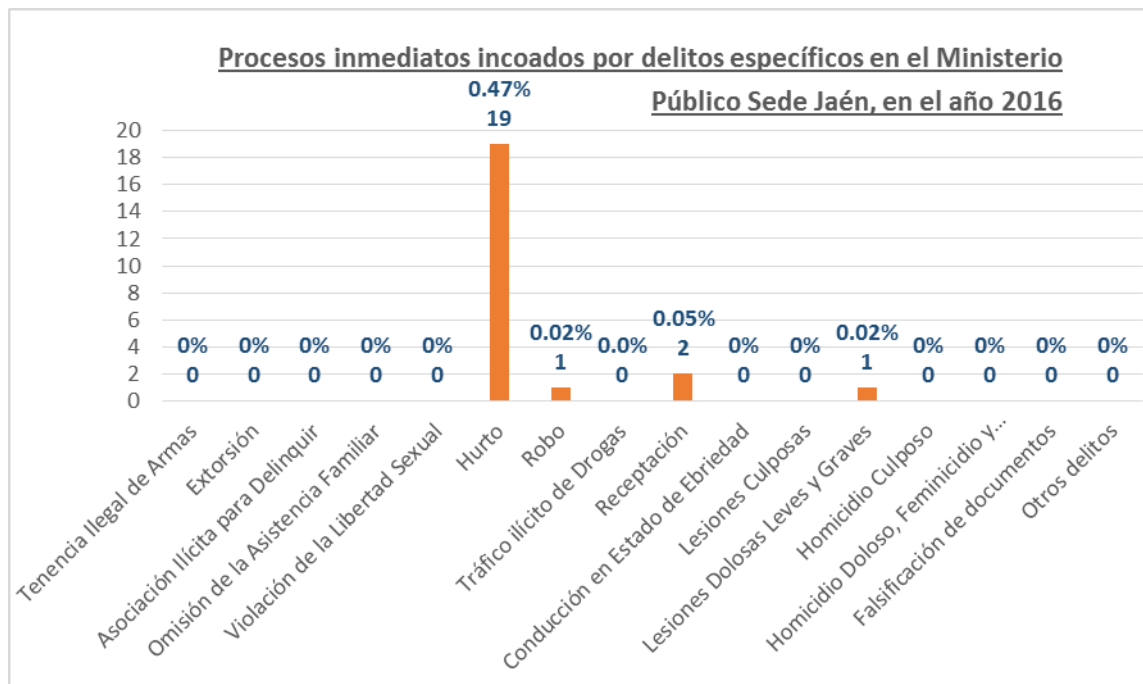
- e) **Cantidad de denuncias en las cuales se incoaron Procesos Inmediatos versus cantidad de denuncias ingresadas por Delitos específicos en la provincia de Jaén durante el año 2016:**

Tabla N° 05: Cantidad de denuncias en las cuales se incoaron procesos inmediatos sólo en casos de Flagrancia Delictiva versus cantidad de denuncias ingresadas en el Ministerio Público – Sede Jaén, en el año 2016.

DELITO	DENUNCIAS INGRESADAS	PROCESOS INMEDIATOS INCOADOS	% DEL TOTAL DE DENUNCIAS INGRESADAS	% DEL TOTAL DE DENUNCIAS INGRESADAS POR DELITO
Tenencia Ilegal de Armas	38	0	0%	0%
Extorsión	24	0	0%	0%
Asociación Ilícita para Delinquir	6	0	0%	0%
Omisión de la Asistencia Familiar	650	0	0%	0%
Violación de la Libertad Sexual	174	0	0%	0%
Hurto	1071	19	0.47%	1.77%
Robo	266	1	0.02%	0.38%
Tráfico Ilícito de Drogas	10	0	0%	0%
Receptación	28	2	0.05%	7.14%
Conducción en Estado de Ebriedad	383	0	0%	0%
Lesiones Culposas	99	0	0%	0%
Lesiones Dolosas Leves y Graves	300	1	0.02%	0.33%
Homicidio Culposo	25	0	0%	0%
Homicidio Doloso, Feminicidio y Sicariato	52	0	0%	0%
Falsificación De Documentos	91	0	0%	0%
Otros delitos	855	0	0%	0%
Total	4072	23	0.56%	

Fuente: Investigación Propia.

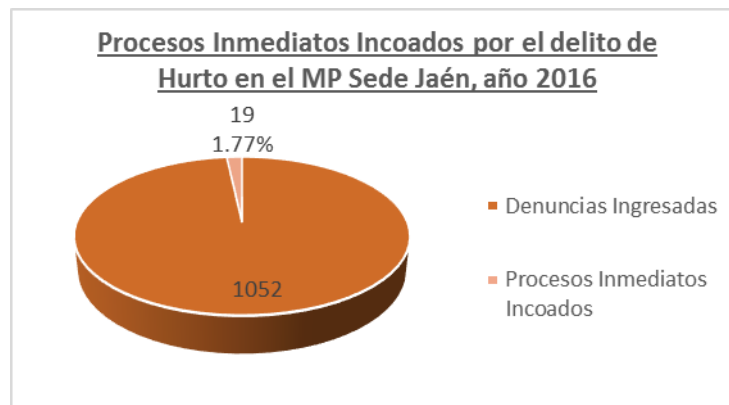
FIGURA No. 05



DESCRIPCIÓN

Si tomamos en cuenta la exposición de motivos de la emisión del Decreto Legislativo No. 1194, era pues para reducir la Criminalidad Organizada y la Inseguridad Ciudadana, así se advierte que en el año 2016, de las 38 denuncias por Tenencia Ilegal de Armas, 24 de Extorsión, 6 de Asociación Ilícita para Delinquir, 87 de Violación de la Libertad Sexual, 650 de Omisión a la Asistencia Familiar, 174 de Violación de la Libertad Sexual, 10 de Tráfico Ilícito de Drogas, 383 de Conducción en Estado de Ebriedad, 99 de Lesiones Culposas, 25 de Homicidio Culposo, 52 de Homicidios Dolosos, 91 Falsificación de Documentos, en ninguno de estos casos se ha solicitado Incoación de Proceso Inmediato.

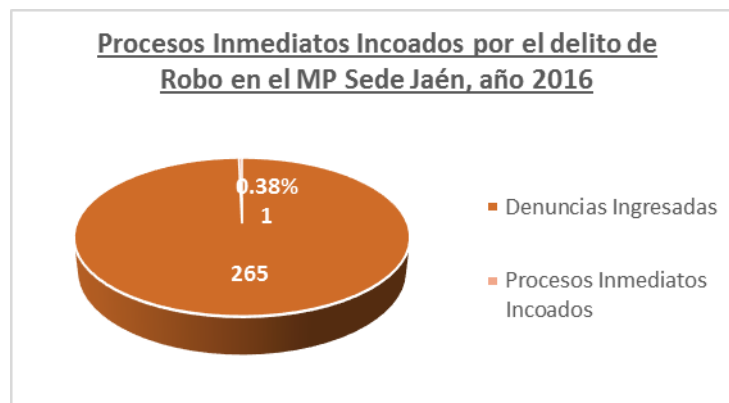
FIGURA No. 06



DESCRIPCIÓN

Ahora del total de 1071 denuncias por Hurto se ha solicitado Proceso Inmediato en 19 casos que equivale al 0.47% del total de denuncias ingresadas y al 1.77% del total de denuncias ingresadas por dicho delito.

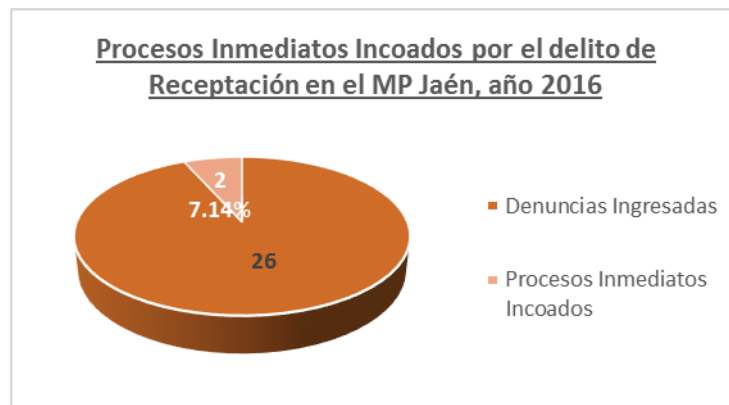
FIGURA No. 07



DESCRIPCIÓN

De igual manera en las denuncias por Robo del total de 266 solo 1 caso se ha solicitado Procesos Inmediato que equivale al 0.02% del total de denuncias ingresadas y al 0.38% del total de casos ingresados por dicho delito.

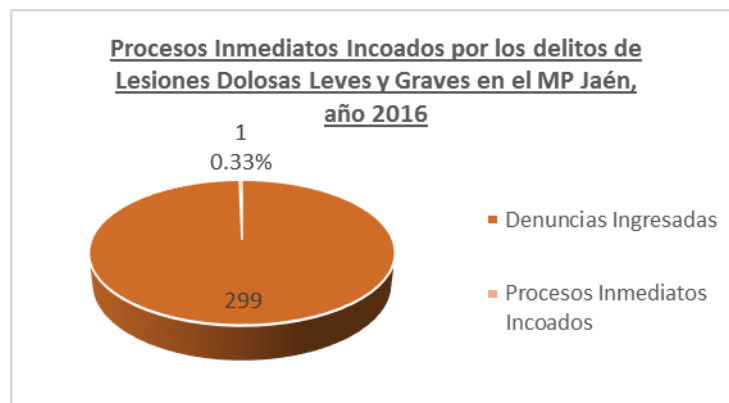
FIGURA No. 08



DESCRIPCIÓN

De los 28 casos ingresados por Receptación solamente se ha solicitado 2 casos que equivale al 0.05% del total de denuncias ingresadas y al 7.14% del total de denuncias ingresadas por delito.

FIGURA No. 09



DESCRIPCIÓN

Y en el caso de Lesiones Leves de las 300 ingresadas solo 1 se ha solicitado Proceso Inmediato que equivale al 0.02% del total de denuncias ingresadas y al 0.33% de aquellas ingresadas solo por ese delito.

f) Análisis de todas las carpetas fiscales que se formaron como consecuencia de la incoación de Proceso Inmediato en flagrancia delictiva en la provincia de Jaén durante el año 2016:

Tabla N° 05: Análisis de las carpetas Fiscales que se formaron como consecuencia de la Incoación de Procesos Inmediatos en Flagrancia Delictiva en el Ministerio Público – Sede Jaén, en el año 2016.

No.	N° EXPEDIENTE	DELITO	TIPO PENAL	FECHA DE INCOACION DE PROCESO INMEDIATO	FECHA DE SENTENCIA	PENA
1	03 – 2016/CF 01-2016	CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO AGRAVADO – TENTATIVA	Artículo 16, 188 y 189 (incisos 3 y 4 del primer párrafo)	03/01/2016	05/01/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 7 años y 4 meses de PPLE. Reparación Civil S/. 500.00 soles
2	67 – 2016/CF 85-2016	CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO AGRAVADO – TENTATIVA	Artículo 16, 185 y 186 (incisos 1, 2 y 5 del primer párrafo)	12/01/2016	13/01/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 1 año y 8 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año. Reparación Civil S/. 150.00 soles
3	74 – 2016/CF 167-2016	CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 1 y 5 del primer párrafo)	13/01/2016	14/01/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 1 mes de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año. Reparación Civil S/. 450.00 soles
4	83-2016/CF 80-2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 1, 2 y 5 del primer párrafo)	14/01/2016	14/01/2016	DECLARA IMPROCEDENTE PROCESO INMEDIATO

5	97-2016/CF 100-2016	CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD – LESIONES LEVES	Artículo 122	18/01/2016	18/01/2016	DECLARA IMPROCEDENT E PROCESO INMEDIATO
6	175-2016/CF 421-2016	CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO AGRAVADO – TENTATIVA	Artículo 16, 185 y 186 (incisos 1, 2 y 5 del primer párrafo)	02/02/2016	04/02/106	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 1 mes de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año. Reparación Civil S/. 100.00 soles
7	128 – 2016/CF 136- 2016	CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO AGRAVADO –	Artículo 185 y 186 (incisos 1 del segundo párrafo)	25/01/2016	26/01/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 6 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año y 3 meses. Reparación Civil S/. 200.00 soles
8	177- 2016/CF 422-2016	CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 5 y 11 del segundo párrafo)	04/02/2016	04/02/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 3 años y 4 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año y 6 meses. Reparación Civil S/. 200.00 soles
9	222-2016/CF 505-2016	CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO AGRAVADO en Grado de Tentativa	Artículos 16, 185 y 186 (incisos 1, 2 y 5 del primer párrafo)	29/02/2016	29/02/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 1 mes de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año. Reparación Civil S/. 200.00 soles
10	365 – 2016/CF 391- 2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (inciso 5 del primer párrafo)	06/03/2016	07/03/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 1 año y 8 meses de PPLSE por el mismo periodo de prueba.

						Reparación Civil S/. 100.00 soles.
11	487-2016/CF 533-2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 5 del primer párrafo)	03/04/2016	03/04/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 6 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año y 6 meses. Reparación Civil S/. 600.00 soles.
12	538 – 2016/CF 622- 2016	CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 1 y 5 del primer párrafo)	14/04/2016	14/04/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 6 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año y 6 meses. Reparación Civil S/. 250.00 soles
13	629 – 2016/CF 807- 2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO en Grado de Tentativa	Artículo 185 y 186 (incisos 1 y 2 del primer párrafo)	09/05/2016	11/05/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 6 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año y 6 meses. Reparación Civil S/. 400.00 soles
14	664 – 2016/CF 888- 2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 2 del primer párrafo e inciso 1 del segundo párrafo)	20/05/2016	20/05/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 6 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año y 6 meses. Reparación Civil S/. 200.00 soles
15	766 – 2016/CF 1059-2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 5 del primer párrafo)	17/06/2016	19/06/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 3 años y 4 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 2 años y 6 meses. Reparación Civil

						S/. 800.00 soles
16	1272- 2016/CF 1319-2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 1 del primer párrafo y 11 del segundo párrafo)	18/09/2016	18/09/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 3 años y 4 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 2 años. Reparación Civil S/. 100.00 soles.
17	1281 – 2016/CF 1626-2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 1 y 5 del primer párrafo)	22/09/2016	23/09/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 6 meses y 8 días de PPLSE por el periodo de prueba de 1 año. Reparación Civil S/. 300.00 soles
18	1338 – 2016/CF 1847-2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 1 y 5 del primer párrafo e inciso 1 del segundo párrafo)	21/10/2016	21/10/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 3 años y 4 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 2 años. Reparación Civil S/. 200.00 soles.
19	1387 – 2016/ CF 1565- 2016	CONTRA EL PATRIMONIO – RECEPTACION AGRAVADA	Artículo 194 y 195 (incisos 1 del primer párrafo)	29/10/2016	31/10/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 3 años y 4 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 2 años. 50 días multa. Reparación Civil S/. 250.00 soles
20	1438 – 2016/CF 1889-2016	CONTRA EL PATRIMONIO – RECEPTACION AGRAVADDA	Artículo 194 y 195 (incisos 1 del primer párrafo)	02/11/2016	03/11/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 6 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 2 años. 50 días multa.

						Reparación Civil S/. 500.00 soles
21	1441 – 2016/CF 1903-2016	CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 1 y 5 del primer párrafo)	06/11/2016	07/11/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 3 años y 4 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 2 años. Reparación Civil S/. 200.00 soles
22	103 – 2017/CF 2059-2016	CONTRA EL PATRIMONIO - HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 1 y 2 del primer párrafo)	03/12/2016	05/12/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 3 años de PPLSE por el periodo de prueba de 2 años. Reparación Civil S/. 600.00 soles
23	105 – 2016/ CF 1810- 2016	CONTRA EL PATRIMONIO – HURTO AGRAVADO	Artículo 185 y 186 (incisos 1 y 5 del primer párrafo)	07/12/2016	09/12/2016	Terminación Anticipada de Proceso – 2 años y 6 meses de PPLSE por el periodo de prueba de 2 años. Reparación Civil S/. 200.00 soles

Fuente: Investigación Propia

DESCRIPCIÓN

De las Carpetas Fiscales que se han analizados tenemos que son en total 23 que resulta ser el 0.56% del total de las denunciadas ingresadas al Ministerio Público Sede Jaén durante el año 2016, de estas carpetas 21 fueron declaradas procedentes y 02 improcedentes (Expediente No. 83-2016-eran varios coautores y 97-2016-faltaba historia clínica).

De las 21 carpetas fiscales: 18 se incoaron por Hurto Agravado y en todas se dictaron penas suspendidas entre 02 y 03 años por un periodo de prueba de 01 a 02 años; 01 por el delito de Robo Agravado en Grado de Tentativa en la cual se logró una condena efectiva de 07 años y 04 meses; y 02 casos por

Receptación agravada donde también se lograron penas suspendidas.

De los 23 casos incoados en Flagrancia delictiva, si bien en los 22 casos que se ha solicitado Proceso Inmediato la pena del extremo máximo es superior a cuatro años (pues se trata de delitos de Hurto Agravado con penas de 3 a 6 y de 4 a 8 años, Receptación de 4 a 8 años, Robo de 12 a 20 años); no obstante, sólo en uno de los casos se ha logrado pena efectiva, pues en los demás se ha considerado el extremo mínimo de la pena teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes genéricas (sin antecedentes penales) y también las causales de disminución de punibilidad (responsabilidad restringida, grado de tentativa) y las reglas de reducción por bonificación procesal (Terminación Anticipada) por lo que fueron sentenciados con penas suspendidas.

CAPITULO VI

DISCUSIÓN

En este apartado se procederá a analizar el resultado alcanzado por cada uno de los objetivos propuestos en el estudio:

OBJETIVO GENERAL

Determinar la eficacia, en la lucha contra la Inseguridad Ciudadana y el Crimen Organizado, de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público-Jaén-Cajamarca

A efectos de poder determinar la eficacia, en la lucha contra la Inseguridad Ciudadana y el Crimen Organizado, de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público-Jaén- Cajamarca, se ha obtenido información conforme al Sistema de Gestión Fiscal (SGF) que en el año 2016 tanto en la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén, han ingresado un total de 4072 denuncias por los diferentes delitos, de ese total 778 se han solicitado Proceso Inmediato y solamente 23 casos se ha solicitado Proceso Inmediato en Flagrancia Delictiva, cantidad que equivale al 0.56% del total de denuncias ingresadas siendo que el 99.44% de denuncias ingresadas se han seguido mediante Proceso Común Ordinario y Procesos Inmediatos en casos de No Flagrancia Delictiva.

Entonces habiendo determinado que la eficacia de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público-Jaén-Cajamarca se reduce al 0.56% del total de denuncias ingresadas, es pertinente analizar las razones que permitieron llegar a esta conclusión, así debemos advertir que esos 23 casos en los cuales se ha solicitado Proceso Inmediato en Flagrancia delictiva han sido por los delitos de Lesiones, Hurto Agravado, Robo y Receptación, delitos menores en los cuales no se requiere mayores diligencias que las declaraciones, constataciones, reconocimiento en rueda

de personas, acreditación del bien materia de la sustracción, etc.; en ninguna de ellas se requiere pericias de mayor complejidad, como sí se requiere en los casos de Tenencia Ilegal de Armas (pues aquí más allá de las diligencias antes indicadas, se requiere mínimamente las pericias de Absorción Atómica, Balística, que solamente la realiza el personal capacitado para ello y en un Laboratorio debidamente implementado) Laboratorio de Criminalística y personal idóneo con el cual en la ciudad de Jaén no contamos, y probablemente esa sea la razón por la cual en los 38 casos ingresados en el año 2016 no se haya solicitado Proceso Inmediato sino que la investigación haya seguido como proceso común. De igual manera podemos indicar en las denuncias de Extorsión, Asociación Ilícita para Delinquir, Violación de la Libertad Sexual, Tráfico Ilícito de Drogas, Lesiones Culposas, Homicidio Culposo, Homicidio Dolosos, Falsificación de Documentos, también se requiere de peritos en Escena de Crimen, perito psicólogo a tiempo completo, perito grafotécnico, insumos para las pericias de absorción atómica.

Mención sorprendente es pues que se advierte que de los 383 casos de Conducción en Estado de ebriedad en ninguno de ellos se haya solicitado la incoación de Proceso Inmediato, pese a que la doctrina lo considera como un delito de bagatela y que por su simpleza bien podrían concluirse a lo mucho en 48 horas, no obstante, ello no es posible pues en la ciudad de Jaén no contamos con un Laboratorio de Criminalística que permita procesar las muestras de sangre y emitir prontamente el Certificado de Dosaje Etílico, que de existir lograríamos muchos beneficios, pues se reduciría la carga procesal en los despachos fiscales, ahorro de material de escritorio, mayor tiempo para que personal fiscal lo dedique a procesos de mayor complejidad.

Otro motivo, para considerar el bajo nivel de eficacia de la obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público-Sede Jaén es que las pericias se envían a Lima, Chiclayo y Bagua, cuyos resultados regresan después de varios meses.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO 1: Conocer cuán eficaz ha resultado la incoación del Proceso Inmediato en el Ministerio Público – Jaén.

Se ha podido conocer que en el año 2016 de las 4072 denuncias que han ingresado al Ministerio Público solo el 0.56% del total se ha solicitado Procesos Inmediato en Flagrancia Delictiva y ello ha sido por delitos menores como son Hurto Agravado, Lesiones Leves, Robo en Grado de Tentativa y Receptación, donde las penas impuestas han sido suspendidas a excepción de una sola que fue efectiva. Se advierte que no se ha solicitado ningún proceso inmediato por aquellos delitos que en la ciudad de Jaén tienen un alto índice criminal, como son homicidio calificado, violación de la libertad sexual, marcaje y reglaje, tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión, tráfico ilícito de drogas, etc., intervenciones en flagrancia delictiva de las cuales no resulta posible incoar Proceso Inmediato, y no por falta de eficiencia de los Fiscales sino por cuanto no se cuenta con los suficientes instrumentos que permitan llevar a cabo una aplicación eficiente y eficaz de este Proceso, que de solucionar sus falencias podrá ser factible su adecuada aplicación; es así que de estas falencias tenemos que en los casos de intervenciones en flagrancia delictiva por Conducir un vehículo en Estado de Ebriedad, el Fiscal deberá solicitar la incoación de un Proceso Inmediato, para lo cual luego de haber realizado la diligencia de Extracción de Muestra de Sangre, entre otras diligencias, se debe contar con el resultado cuantitativo de dicho examen para calificar con propiedad si tipifica como delito o no, ya que en nuestro ordenamiento jurídico para ser considerado delito de Conducción en Estado de Ebriedad debe superar el 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, pero el problema se presenta por cuanto no se cuenta con Laboratorio que realice este tipo de pericias, entonces el procedimiento que se realiza es recabar la muestra, remitirla al Laboratorio de Criminalística de Chiclayo de donde en el mejor de los casos, el resultado regresa luego de veinte días, entonces es allí donde recién se califica el delito y se

procede a incoar un Proceso Inmediato pero ya no en flagrancia delictiva. Situación similar sucede con los delitos de Tenencia Ilegal de armas, que tampoco se cuenta con un Laboratorio de Balística Forense.

Por otro lado en las intervenciones por Tráfico Ilícito de Drogas, en la Comisaría PNP no se cuenta con un área especializada que se avoque al conocimiento de intervenciones de ese tipo, pues de ello se encarga el Departamento de Investigación Criminal y Ayuda a la Justicia – DEPICAJ, que no cuenta con los insumos químicos (reactivos) para determinar en principio el tipo de sustancia química incautada, y luego de ello se remite al Laboratorio de Criminalística de Lima cuyos resultados regresan a los seis meses en el mejor de los casos.

Asimismo en las intervenciones por tráfico de madera ilegal, en la ciudad de Jaén no se cuenta con una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, pues cuando se dan casos de esta naturaleza es el Fiscal Penal de turno el que debe avocarse para luego de haber realizado las diligencias urgentes y necesarias derivar la investigación a la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Chiclayo para que continúe con las investigaciones. En los casos de Violación de la Libertad Sexual, cuyas intervenciones se realicen los fines de semana y/o feriados largos, no resulta posible recabar la referencia de la menor a través de cámara gesell por cuanto en la Sede del Ministerio Público Jaén, solamente se cuenta con una perito psicóloga para atender todos los casos que suceden en la Provincia de Jaén que además de sus doce distritos también se tiene jurisdicción en el distrito de Pión - Chota, distrito de Cañaris - Ferreñafe y Ambato Tamborapa – San Ignacio, lo que genera una demora ante la carga procesal que tiene la mencionada perito psicológica en apoyar oportunamente con la aplicación de sus exámenes de aplicación inmediata que serán materia probatoria en el proceso bajo análisis.

En resumen, ante la carencia de implementación tanto de logística como de personal de apoyo en las Fiscalías de Jaén resulta poco eficaz la

obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en Flagrancia Delictiva en el Ministerio Público – Jaén.

OBJETIVO 2: Determinar los factores que harían eficaz la aplicación del Proceso Inmediato en la ciudad de Jaén.

Se advierte que en el año 2016 por el delito de Conducción en Estado de Ebriedad ingresaron 383 casos (de haber contado con un Espectrofotómetro en menos de 48 horas se habría determinado la cantidad de alcohol en la sangre de los intervenidos), por Tenencia Ilegal de Armas 38 casos (se requiere un perito forense balístico e insumos químicos), por Violación de la Libertad Sexual 174 casos (se requiere mínimamente 04 peritos psicólogos forenses que cubran los turnos de 24 horas, aunado a un personal digitador asignado al área de cámara gesell, ello facilitaría realizar entrevistas mediante cámaras gesell en cualquier momento sin importar si es feriado o fines de semana; se requiere que se facilite de Kits para la recepción de muestras de ADN y otros fluidos, necesarios e indispensables en este tipo de delitos), por el delito de Hurto 1071 casos, Robo 266 casos, Homicidio Doloso 52 casos, Falsificación de Documentos 91 (se requiere peritos forenses en escena de crimen, peritos dactiloscópicos que recaben muestras dactilares para su posterior homologación), Tráfico Ilícito de Drogas 10 casos (materiales como las balanzas de pesaje, reactivos químicos para marihuana (cannabis sativa), PBC, Latex de opio, los mas comunes en las intervenciones realizadas en esta ciudad), Receptación 28 casos (peritos forenses para la restauración de la series de los vehículos, así como los insumos químicos), Lesiones Culposas 99, Homicidio Culposo 25 (peritos forenses en accidentes de tránsito); de todas estas cifras ninguno se ha solicitado Proceso Inmediato en Flagrancia delictiva.

Para la eficaz aplicación del Proceso Inmediato en la ciudad de Jaén se hace necesario la implementación de recursos humanos que se materializa en personal policial, psicólogos, médicos, capacitados (peritos forenses en

cada una de sus áreas) que van a coadyuvar en desarrollar cabalmente la función fiscal en relación directa con la tasa de criminalidad que en la ciudad de Jaén, en la actualidad ha presentado un crecimiento alarmante, logística que implica asignación de insumos (reactivos químicos), materiales (guantes, bolsas para cadáveres, vehículos para el traslado del personal, kits para recabar muestras biológicas) lo que van a permitir recabar las muestras que posteriormente van a ser considerados medios probatorios que pueda generar certeza al momento de emitir condenas, infraestructura es decir, ambientes adecuados que permitan recabar las muestras, sin que éstas se contaminen y dentro del mas breve plazo posible para que las mismas sean aprovechables, así como infraestructura equipada dela División Médico Legal de Jaén y así evitar trasladar los cadáveres a la jurisdicción de Amazonas.

OBJETIVO 3: Demostrar la importancia de la implementación de un Laboratorio de Criminalística completo para pericias de todo tipo (absorción atómica, balística, biología forense, dosaje etílico, grafotecnia) con personal idóneo, a fin de incoar Proceso Inmediato en todos los casos de flagrancia delictiva.

Un laboratorio de criminalística, urge en la ciudad de Jaén si lo que se busca es una adecuada aplicación del Proceso Inmediato en flagrancia delictiva, puesto que la carencia de este tipo de soporte, de alguna forma ha favorecido la creciente ola delictiva por la que se encuentra atravesando esta ciudad, ello se ve reflejado en resultados periciales tardíos, muestras inaprovechables, elevación de la carga procesal, condenas tardías, circunstancias que generan un malestar en la sociedad y un reproche a las autoridades que administran justicia. Ello hace que recalquemos una vez mas, lo que señala Alfredo Araya Vega en su obra *“El Nuevo Proceso Inmediato (Decreto 1194). Hacia un Modelo de una Justicia como Servicio Público de Calidad con Rostro Humano”*, donde considera al Proceso Inmediato como una de las reformas que:

“Debe ponderarse la existencia de recursos económicos frescos para la modernización del Sistema de Administración de Justicia, Órganos Forenses, Sistema Penitenciario, Defensa Pública”⁴⁴.

Este punto es el que debe tomar en cuenta para que pronto se implemente un Laboratorio de Criminalística completo, aunado a ello se le brinde el apoyo en recursos humanos necesario para que se pueda aliviar la carga procesal que evita el adecuado cumplimiento del Decreto Legislativo 1194 modificado por el Decreto Legislativo No. 1307.

OBJETIVO 4: Establecer que no se cumple con el fin de la dación del Decreto Legislativo No. 1194, pues las cifras demuestran que en el año 2016 sólo existieron 23 procesos inmediatos incoados en flagrancia delictiva, delitos de menor gravedad, que no están relacionados directamente con la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana.

Al respecto debemos indicar que el Estado al emitir leyes, en especial el Decreto Legislativo 1194 modificado por el Decreto Legislativo No. 1307, consideró que sería una de las soluciones al problema de inseguridad ciudadana y alto índice criminal (Crimen Organizado), y no podemos negar que en efecto puede ser una de las alternativas de solución que de aplicarse correctamente y con los medios necesarios apoyarían la labor fiscal y judicial en general; no obstante, debemos recalcar que el Crimen Organizado está relacionado directamente con los delitos de Homicidio calificado-asesinato, Secuestro, Trata de personas, Violación del secreto de las comunicaciones, Delitos contra el patrimonio, Pornografía infantil, Extorsión, Usurpación, Tipo base y agravada, Delitos informáticos, Delito contra la propiedad industrial, Delitos monetarios, Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, Delitos contra la salud

⁴⁴ Araya A. (2016) *“El Nuevo Proceso Inmediato (Decreto 1194). Hacia un modelo de una justicia como servicio público de calidad con rostro humano”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti. Año 1. No. 1. Marzo 2016. Lima – Perú. Pág. 12.

pública, Tráfico ilícito de drogas, Delito de tráfico ilícito de migrantes, Delitos ambientales, Delito de marcaje o reglaje, Genocidio, desaparición forzada y tortura, Delitos contra la administración pública (artículos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP), Delito de falsificación de documentos, Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 D. Leg. 1106; conforme así lo establece la Ley No. 30077.

Sin embargo, advertimos que en el año 2016 sólo se han requerido 23 procesos inmediatos en Flagrancia Delictiva y son por delitos menores cuyas penas logradas han sido suspendidas, ninguno de esos 23 casos ha sido catalogado como “Crimen Organizado”, de ello se colige que los procesos inmediatos se dan en casos de menor gravedad y considerados como “fáciles”, pues en delitos consideramos como “Crimen Organizado” se requiere de múltiples actos de investigación, entre ellos pericias varias, ya que no debemos olvidar que una de las características de este tipo de delitos es la tecnología sofisticada que utilizan en su actuar delictivo, y si ello es así, el ente persecutor del delito así como los que administran justicia, llámese Ministerio Público y Poder Judicial también tienen que estar a la altura y utilizar tecnología de punta, circunstancia que no permite solicitar en un plazo de 48 horas un proceso inmediato para tales delitos, sino como reitero ello se reduce sólo para delitos menores y aislados.

CONCLUSIONES

1. La obligatoriedad de instar Proceso Inmediato en el Ministerio Público de Jaén-Cajamarca, no ha resultado eficaz en la lucha contra la Criminalidad Organizada y la Inseguridad Ciudadana, pues se ha advertido que durante el año 2016 solamente en 23 casos se ha solicitado Proceso Inmediato en Flagrancia Delictiva y ha sido por delitos menores, que hacen el 0.56% del total de denuncias ingresadas.
2. La falta de recursos humanos, materiales y logísticos son la principal causa que determinan la ineficacia de la incoación de Proceso Inmediato en el Ministerio Público Sede Jaén.
3. La imperiosa necesidad de implementar un Laboratorio de Criminalística en la Sede Jaén donde se pueda llevar a cabo distintas pruebas periciales además de los recursos humanos y logísticos necesarios harán que en los casos de Flagrancia Delictiva se solicite Proceso Inmediato y se logre condenas firmes.
4. No se ha cumplido con la voluntad del legislador al emitir el Decreto Legislativo No. 1194 modificado por el Decreto Legislativo No. 1307, esto es la lucha contra el Crimen Organizado y la Inseguridad Ciudadana, pues la incoación de Procesos Inmediatos en la Sede del Ministerio Público - Jaén se ha reducido al 0.56% del total de denuncias ingresadas durante dicho año y han sido por delitos menores, ninguno catalogado como "Crimen Organizado".

RECOMENDACIONES

1. La implementación de nuevas políticas criminales así como la dación de nuevas leyes, tienen como única finalidad regular normas de convivencia de los ciudadanos dentro de un ordenamiento jurídico organizado, pero ésta implementación debe estar de la mano con otros factores, así por ejemplo en el caso materia de la presente tesis “el factor presupuesto” pues el Estado al emitir Leyes debe destinar partidas presupuestales, teniendo en cuenta la realidad de cada Distrito Fiscal, para que el cumplimiento de éstas permitan llevar a cabo la labor de manera productiva y eficaz.
2. Actualizar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del Ministerio Público, donde a través del área de Administración se deberá verificar in situ y también mediante los datos estadísticos de la carga procesal, la urgencia de elevar la cantidad de personal administrativo asignado a cada Despacho Fiscal (asistentes en función fiscal y administrativos, psicólogos, médicos legistas). Se gestione ante la Fiscalía de la Nación la creación de Despachos Fiscales Especializados como son Fiscalía Provincial Penal Especializada en Prevención del Delito, en Materia Ambiental y Tráfico Ilícito de Drogas con Sede en la ciudad de Jaén, ello va a permitir que la carga que conocen los Despachos Fiscales Penales comunes se reduzca, y puedan avocarse con mayor dedicación a otros casos con posibilidades de juicio.
3. Gestionar ante el Ministerio del Interior y en forma conjunta con el señor Fiscal de la Nación la creación urgente y necesaria de un Laboratorio de Criminalística – Sede Jaén, debidamente equipado (con personal capacitado, logística y materiales) que permita no depender del existente en la ciudad de Bagua y Chiclayo y coadyuve en forma célere en la investigación y posterior incoación de Procesos Inmediatos.

4. Coordinar con el Jefe de la División de Policial de Jaén, a fin de que gestione ante el Ministerio del Interior, facilidades del caso (habitación, alimentación), para que aquellos efectivos policiales que estén interesados en capacitarse e inscribirse en cursos para obtener el título de peritos forenses en las diferentes áreas de la criminalística, siendo que luego de concluidos sus estudios regresen a la ciudad de Jaén, integren el Laboratorio de Criminalística y ejerzan su función a cabalidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Araya A. (2016) *“El Nuevo Proceso Inmediato (Decreto 1194). Hacia un modelo de una justicia como servicio público de calidad con rostro humano”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti.
- Araya A. (2015) *“Anotaciones sobre el Proceso Inmediato”*. Lima: Actualidad Penal.
- Bueno, L. (2017) *“La Procedencia de la Constitución de Actor Civil durante la Audiencia Única”*. Lima: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano No. 629.
- Guillermo, J. (2017). *“La Reforma del Proceso Inmediato en el D. Leg. No. 1307”*. Lima: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano No. 629.
- Herrera, M. (2017) *“El Proceso Inmediato”*. Lima: Pacífico Editores SAC.
- Mendoza, G. (2016). *“El Proceso Inmediato en el Proceso Penal Peruano. Aplicación del Decreto Legislativo 1194”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti.
- Oré, A. (2016) *“El Nuevo Proceso Penal Inmediato”*. Lima: Gaceta Jurídica SA.
- Salas, J. (2016) *“El Proceso Inmediato”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Fraganti.
- Salas, J. (2016) *“Cuestiones Problemáticas del Proceso Inmediato según el Decreto Legislativo No. 1194”*. Lima: Gaceta Jurídica SA.

Sánchez, P. (2016). *“El Nuevo Proceso Penal”*. Lima: Editorial Moreno SA.

San Martín, C. (2016) *“Derecho Procesal Penal. El Proceso Inmediato (NCPP originario y D. Leg No. 1194)”*. Lima: Gaceta Penal No. 79.

San Martín, C. (2015) *“Derecho procesal penal – Lecciones”*. Lima: Jurista Editores.

Sumire, E. (2016) *“Las Garantías y la Eficacia en el Proceso Inmediato”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti.

Tejada, J. (2016) *“El Proceso Inmediato y su aplicación en los primeros cien días”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti.

Zelada, R. (2016) *“El Proceso Inmediato Presupuestos y Excepciones de Aplicación”*. Lima: Revista Informativa de Actualidad Jurídica Ius In Franganti.

Acuerdo Plenario No. 6-2010/CJ-116 del 16 de noviembre de 2010.

Acuerdo Plenario 002-2016/CIJ-116 del 01 de junio de 2016.

PÁGINAS DE INTERNET

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20140308_02.pdf

ANEXOS

RESOLUCIONES DE PROCEDENCIA A PROCESO INMEDIATO EN LAS CARPETAS FISCALES ANALIZADAS